

C.A. de Santiago

Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que el 13 de mayo de 2021 comparece Alfredo Alcaino de Esteve, en representación de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., y conforme el artículo 70 de la Ley N° 21.000 de 2017, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante CMF), por estimar que el acto administrativo correspondiente al Oficio Circular N° 1208 de 30 de abril de 2021, cuya emisión fue acordada por el Consejo en Sesión Extraordinaria N° 102 de la misma fecha, y ejecutado por la Resolución Exenta N° 2.340 también de dicho día, es ilegal y causa perjuicio a la reclamante.

Contextualiza que la reclamante es una compañía de seguros de vida con más de 32 años de experiencia, y que participa en un mercado donde intervienen 35 compañías de seguro, y que desarrolla como producto previsional el de rentas vitalicias, cuya recaudación en 2020 fue de 9,84 millones de unidades de fomento, teniendo una participación de mercado del 24,55%, con 65 mil clientes de rentas vitalicias, administrando e invirtiendo activos por 6.962 millones de dólares.

Señala que en el desarrollo del giro las compañías están expuestas a diversas clases de riesgos financieros, entre los cuales están los riesgos de mercado incidido principalmente por factores del mercado de valores, riesgos de descalce, por motivo de inversiones distintas a la deuda, que produzca un descalce entre activos y pasivos y riesgos de liquidez, derivado de la incapacidad para obtener fondos para asumir el flujo de pago sin incurrir en pérdidas significativas. En cuanto a todos los riesgos, existe normativa sectorial que establecen medidas y obligaciones para mitigarlos.

Relata, por otra parte, que mediante la Ley N° 21.330 se reguló un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales y de anticipo de rentas vitalicias, agregando un artículo transitorio, el 50° a



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXHTXXMJWX

la Constitución. En lo que respecta al reclamo, dicha normativa dispuso que los pensionados de rentas vitalicias tenían el derecho a solicitar a la compañía de seguros con la que hubieran contratado, un adelanto del pago de sus rentas, por una sola vez y de forma voluntaria, de hasta el 10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía para cubrir el pago de sus pensiones, el cual se devuelve o restituye mediante la imputación al monto mensual de rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que lo represente.

Ahonda que el monto de renta mensual se encuentra estrechamente vinculado a diversos factores entre los que están los recursos acumulados, las expectativas de vida y las tasas de interés para la inversión de recursos. Además, que junto con celebrarse el monto de renta vitalicia y recibida la prima única, la compañía conforma lo que se denomina reserva técnica que estará integrada por la prima única y un aporte adicional que efectúa la propia compañía con su patrimonio, para conformar una reserva o capital que garantice la rentabilidad suficiente para pagar la renta vitalicia, encontrándose este procedimiento regulado en el artículo 20 del D.F.L. N° 251 de 1931.

Argumenta que el oficio reclamado adolece de diversas ilegalidades, en primer lugar, infracción al artículo 20 N° 3 de la Ley N° 21.000 que dispone: “*Artículo 20.- Corresponderá al Consejo: 3. Dictar normas de carácter general, circulares, oficios circulares y otras resoluciones que se requieran. La normativa que se imparta deberá contener los fundamentos que hagan necesaria su dictación, incluyendo una definición adecuada del problema que se pretende abordar, la justificación de la intervención regulatoria, la evaluación del impacto de dicha regulación, así como aquellos estudios o informes en que se apoye, en los casos que corresponda o sea posible. Dicha normativa deberá ser objeto de una consulta pública. Con dicho propósito, antes de la dictación de ésta, se dará a conocer el proyecto de norma en la página web de la Comisión, disponiéndose los mecanismos necesarios para que los interesados*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXHTXXMJJWX

*puedan formular observaciones a éste. La Comisión, por resolución fundada, podrá excluir de los trámites contemplados en el párrafo anterior aquella normativa que, atendida su urgencia, requiera de aplicación inmediata. Con todo, en dichos casos una vez que se haya dictado la norma, la Comisión deberá elaborar el informe de evaluación de impacto regulatorio correspondiente. Del mismo modo, no se requerirán los trámites contemplados en el párrafo primero del presente numeral cuando la Comisión, por resolución fundada, estime que estos resultan impracticables, innecesarios o contrarios al interés público.”*

Precisa que esta norma impone el deber de consulta pública para la dictación de las normas que se individualizan, y que solo se puede omitir el trámite de previa consulta, cuando existe calificación fundada por parte de la reclamada, y solo en aquellos casos que por su naturaleza y urgencia fuera necesaria su aplicación inmediata. Y en el caso particular no se hizo la consulta pública, ni se dictó resolución fundada que justifique la falta de la misma, razón suficiente para acoger el reclamo.

Adiciona a lo anterior, que según la misma normativa, la reclamada deberá para la emisión del acto dar los fundamentos que hagan necesaria su dictación, definiendo el problema y la evaluación de impacto de dicha regulación, requisitos que de fondo no cumple el oficio reclamado. Y cita el Ingreso de la Corte Suprema N° 20.713-2020.

Arguye como perjuicio de la actuación de la reclamada que la reclamante no pudo representar errores e infracciones cometidas por el oficio reclamado y a la vez poder entender el sentido y alcance de la regulación.

Reclama en segundo lugar, la infracción a la Ley N° 21.330, artículo 20 del D.F.L. N° 251, la Circular N° 1512 de 2 de enero de 2001 y a la regulación de facultades de la CMF establecidas en el artículo 1 inciso segundo y artículo 5 N° 1 de la Ley N° 21.000, ya que la reforma constitucional dispuso que la solicitud de anticipo es sobre la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros, y de forma arbitraria e ilegal, el oficio



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXHTXXMJWX

reclamado dispuso que “*La reserva a considerar, en consistencia con la Circular N° 2.062, será la reserva técnica base.*”

Por ende, es clara la Ley N° 21.330 al referir que el anticipo se calcula sobre la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros, la que está conformada con el capital del afiliado o prima única, y no aquella parte que no mantiene el pensionado sino que es un aporte de la compañía, produciendo lo anterior un perjuicio a la reclamante al aumentarse la base de lo que puede ser anticipado.

Aclara que a la fecha han efectuado solicitud de anticipo 15.494 pensionados y 3.239 beneficiarios de la compañía, lo que totaliza 2.260.000 unidades de fomento, representando un 29% de los pensionados y beneficiarios y un 32% del total de la reserva técnica base susceptible de anticiparse.

Estima que un 5% corresponde a aportes de la compañía, que representa aproximadamente \$3.338.000.000

Argumenta, en tercer término la infracción al N° 7 de la Norma de Carácter General N° 208 de 2007 de la reclamada, artículo 20 del D.F.L. N° 251 y a las normas sobre facultades de la CMF contenidas en el artículo 1 inciso 2 y artículo 5 número 1 de la Ley N° 21.000, ya que el oficio reclamado, omite instruir y considerar en la imputación al monto mensual de rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado a más de la tasa de reserva, una tasa de mercado o rentabilidad de mercado, calculada sobre el monto del anticipo, adelanto o empréstito efectuado, sobre todo cuando conforme al artículo 12 de la Ley N° 18.010 la gratuidad no se presume.

Pide en definitiva dejar sin efecto el acto reclamado, en todas sus partes, debiendo la reclamada dictar un nuevo oficio circular en que rectifique y enmiende las ilegalidades cometidas, en el sentido expuesto en el reclamo, con expresa condena en costas.

**Segundo:** Que el 11 de junio de 2021 el Consejo de Defensa del Estado, representado por Ruth Israel López, evacuó informe solicitando el rechazo del reclamo.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXHTXXMJWX

Sostiene en primer término ausencia de ilegalidad del Oficio Circular N° 1208, al ser una instrucción de carácter eminentemente operativa, que tiene por objeto facilitar la implementación de la Ley N° 21.300, reprochando la reclamante que la CMF no se haya inmiscuido en los tópicos regulados por la Constitución, por ejemplo, debiendo haber establecido una tasa de interés de mercado por el adelanto. Acusa haber olvidado la reclamante la naturaleza jurídica de lo regulado, al no tratarse en la especie de una operación de crédito de dinero. Luego resume los hitos legislativos de la reforma constitucional y también con posterioridad el contexto de emergencia sanitaria que motivó la reforma indicada.

Aduce que el acto reclamado fue dictado por expreso mandato constitucional, la cual es suficiente en el detalle de la base de cálculo del anticipo, el monto a anticipar y la fecha de pago, no innovando el oficio circular N° 1208.

Explica que la reserva técnica de las rentas vitalicias se calcula mes a mes para cada contrato, considerando diversos factores, entre los cuales están la pensión comprometida pagar y la expectativa de vida. Aduce que el acto reclamado uniforma la implementación operativa del proceso de adelanto del pago de renta vitalicia dando diversas instrucciones conforme al mandato constitucional y sostiene nuevamente que el reproche es no haber innovado en las materias que el constituyente reguló.

Fundamenta que la forma de operación del mecanismo de anticipo de rentas descarta una lesión patrimonial especialmente intensa, dado que se estableció un monto de compensación al anticipo consistente en *“se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado”*, no habiendo una exigencia de gratuidad a las compañías de seguro, por lo que solo se trata de un anticipo de las pensiones, es decir, pagar antes de lo que se debía pagar, traducándose el mecanismo en una menor pensión futura, pero también en una menor deuda futura respecto de los pensionados.



Reprocha que omite la reclamante cualquier referencia al artículo 64 del D.L. N° 3.500 de 1980, que ya preveía el anticipo de la fecha de inicio de pago de rentas vitalicias. Por otra parte, agrega que la reserva técnica también va disminuyendo mes a mes en virtud de los pagos efectuados, siendo esta solo una representación de la deuda, y no una suma de dineros o activos.

Alega, por otra parte, la improcedencia de cuestionar oblicuamente una reforma constitucional por medio de esta acción constitucional y que los actos recurridos fueron dictados conforme a la normativa de la CMF, que puede emitir normas de carácter general, circulares, oficios circulares y resoluciones.

Aduce que no existe infracción a la normativa de reservas técnicas; sin embargo, aclara que estas no son sumas de dineros o activos, sino representación de una deuda de cada contrato de seguro, por tanto no se compone de aportes de la compañía y de aportes del asegurado, sino que es una representación de la deuda para con el pensionado de renta vitalicia, no existiendo lo indicado como reserva de fondos del pensionado.

Sostiene que resulta improcedente la alegación de establecer una tasa de interés por vía administrativa, esto es mediante la dictación de actos de la reclamada para la compensación de los anticipos de pensionados, lo cual además, ya estaría resuelto por la normativa constitucional reformada. También imputa que no se establece con claridad la normativa infringida y la forma que se ha producido la infracción que la reclamante atribuye. No existiendo un perjuicio acreditable, no siendo la mera enunciación del mismo suficiente, además que la misma reforma estableció el modo de compensación del anticipo que pudiera solicitarse por cada pensionado.

Explica que la invalidación que pide sería ineficaz y no se puede revertir la orden expresa que la Constitución ha dado a la reclamada, debiendo ajustarse la actuación de la reclamada a lo dispuesto por la Constitución Política de la República.

Pide en definitiva el rechazo del reclamo de ilegalidad, con costas.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXHTXXMJJWX

**Tercero:** Que el 18 de marzo de 2022, el Excmo. Tribunal Constitucional remitió a estos autos fallo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad conocido bajo el ingreso N° 11559-21-INA de 17 de marzo de 2022, interpuesto por Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., el cual acogió por mayoría la inaplicabilidad planteada, declarando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo único, incisos 12°, 13° y 14° de la Ley N° 21.330 que modifica la Carta Fundamental.

**Cuarto:** El artículo 70 de la Ley N° 21.000, en lo pertinente, establece que: *“Las personas que estimen que una norma de carácter general, instrucción, comunicación, resolución o cualquier otro acto administrativo emanado del Consejo, del presidente de la Comisión o del fiscal, según corresponda, distinto de aquellos a los que se refiere el artículo siguiente, es ilegal y les causa perjuicio, podrán presentar reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.*

*El reclamo de ilegalidad deberá interponerse dentro del plazo de diez días hábiles computado de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, contado desde la notificación o publicación del acto que rechaza total o parcialmente el recurso de reposición o desde que ha operado el silencio negativo al que se refiere el inciso tercero del artículo 69.*

*Si la Corte de Apelaciones declarare admisible el reclamo, dará traslado de éste por seis días hábiles notificando esta resolución por oficio.”*

**Quinto:** De lo anterior se puede inferir que el acto cuya ilegalidad se reclama por la presente vía, esto es el Oficio Circular N° 1208 de 30 de abril de 2021, cuya emisión fue acordada por el Consejo en Sesión Extraordinaria N° 102 de la misma fecha, y ejecutado por la Resolución Exenta N° 2.340 también de dicho día, cumple con las características que la norma precitada exige para ser objeto del presente reclamo de ilegalidad.

**Sexto:** Pues bien, cabe recordar que dicho Oficio Circular N° 1.208 se origina como consecuencia de lo establecido en los incisos pertinentes del artículo único introducido a la Carta Fundamental por



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXHTXXMJJWX

la Ley N° 21.330, normativa dictada para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales y anticipo de rentas vitalicias, en las condiciones que indica, conocida comúnmente como “Ley del Tercer Retiro”.

Así, la referida ley agregó, como nueva disposición quincuagésima transitoria, a la Constitución Política de la República, disponiendo en los incisos 12, 13 y 14, atinentes a lo que nos ocupa, lo siguiente:

*“A partir de la publicación en el Diario Oficial de esta reforma y hasta los 365 días siguientes, los pensionados o sus beneficiarios por renta vitalicia podrán, por una sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al diez por ciento del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope máximo de ciento cincuenta unidades de fomento.*

*El retiro que efectúen los pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo, se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado.*

*Las reglas relativas a la intangibilidad y naturaleza de estos recursos, la tramitación de la solicitud, el pago de pensiones de alimentos impagas y la información a las autoridades correspondientes, incluida la Comisión para el Mercado Financiero, contenidas en los incisos precedentes de esta disposición, serán aplicables a las solicitudes de anticipos que efectúen los pensionados o sus beneficiarios por rentas vitalicias. Con todo, el pago de los fondos solicitados se efectuará al pensionado o sus beneficiarios en un plazo máximo de treinta días corridos, contados desde la recepción de la solicitud. La Comisión para el Mercado Financiero dictará las instrucciones necesarias para la aplicación de los incisos precedentes.”*

**Séptimo:** Como ya se indicó en el motivo tercero de esta sentencia, la reclamante, durante la tramitación del presente reclamo de ilegalidad, dedujo ante el Excmo. Tribunal Constitucional un



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXHTXXMJWX



requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad de los incisos 12, 13 y 14 de la disposición quincuagésima transitoria de la Carta Fundamental, antes reproducidos.

Mediante sentencia ya referida se acogió el mentado requerimiento, declarando la inaplicabilidad, por inconstitucionalidad de los incisos antes referidos.

En este escenario, entonces, conforme al artículo 93 N° 6 e inciso 11 del mismo precepto de la Carta Fundamental, esta Corte no puede considerar, bajo ninguna circunstancia, los incisos 12, 13 y 14 del artículo único de la Ley N° 21.330, pues la sentencia estimatoria de inaplicabilidad así lo dispuso, sentencia que por cierto es vinculante y produce el efecto de cosa juzgada en la presente causa.

**Octavo:** Ergo, siendo el Oficio Circular N° 1.208 consecuencia de lo dispuesto en los incisos 12, 13 y 14 del artículo único de la Ley N° 21.330, dicho acto administrativo ha quedado sin sustento normativo, por lo que su dictación deviene en ilegal, por la imposibilidad de aplicar a las compañías de seguros las situaciones que esa regla contempla, toda vez que el Excmo. Tribunal Constitucional declaró inaplicables los mentados incisos de dicha Ley, en lo antes pormenorizado, cuyo contexto es precisamente el objeto de la regulación contemplada en el Oficio Circular N° 1.208, decisión jurisdiccional que, al tenor de los artículos 91 y 92 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, es vinculante en esta sede jurisdiccional.

**Noveno:** Consecuencia de lo anterior, resulta inoficioso ponderar el resto de las disposiciones citadas en el reclamo de ilegalidad, habida cuenta que al carecer de sustento normativo el citado Oficio Circular N° 1.208, por las razones antedichas, esas consideraciones son innecesarias.

**Décimo:** Del mismo modo, los argumentos vertidos por la CMF, al contestar el presente reclamo radican, en lo principal, en ser consecuencia de lo que dispone la norma transitoria constitucional antedicha, en los mentados incisos 12, 13 y 14, argumento que ya no tiene respaldo alguno, a la luz de la sentencia estimatoria de inaplicabilidad, antes comentada.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXHTXXMJJWX

**Undécimo:** Por consiguiente, debe acogerse el reclamo de ilegalidad en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por las razones anteriores y con lo dispuesto en los artículos 93 N° 6 y 94 de la Constitución Política; artículos 91 y 92 del D.F.L. N° 5 de 2010, Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y artículo 70 de la Ley N° 21.000, se **acoge** el reclamo de ilegalidad deducido por Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. y en consecuencia se deja **sin efecto** el Oficio Circular N° 1.208 de 30 de abril de 2021, acordada por el Consejo de la CMF en Sesión Extraordinaria N° 102 de la misma fecha, y ejecutado por la Resolución Exenta N° 2.340 también de dicho día, por carecer de sustento normativo.




Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

**Contencioso-Administrativo N°262-2021.**

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Jorge Zepeda Arancibia, señora Marisol Rojas Moya y señor Tomás Gray Gariazzo, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

 <b>JORGE LUIS Zepeda ARANCIBIA</b> Ministro Corte de Apelaciones Quince de julio de dos mil veinticuatro 15:19 UTC-4		 <b>Marisol Andrea Rojas Moya</b> Ministro Corte de Apelaciones Quince de julio de dos mil veinticuatro 13:01 UTC-4	
--	---	---	---



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXHTXXMJJWX

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Marisol Andrea Rojas M. Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a quince de julio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXHTXXMJJWX

C.A. de Santiago

Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que el 13 de mayo de 2021 comparece Andrés Varas Greene, en representación de **Bice Vida Compañía de Seguros S.A.**, y conforme el artículo 70 de la Ley N° 21.000 de 2017, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la **Comisión para el Mercado Financiero** (CMF), por estimar que el acto administrativo correspondiente al Oficio Circular N° 1.208 de 30 de abril de 2021 es ilegal y causa perjuicio a la reclamante.

Contextualiza que conforme a la Ley de Seguros, el comercio de asegurar se encuentra altamente regulado y solo podrá hacerse por sociedades anónimas, constituyéndose en dicho marco la reclamante.

Define que según el artículo 1 de la Ley de Seguros, se distingue entre distintos patrimonios, entre los que están el patrimonio neto, patrimonio mínimo y el patrimonio de riesgo. Además de existir también el llamado patrimonio libre que corresponde al exceso de patrimonio neto sobre el patrimonio de riesgo.

Aclara que sobre el patrimonio de riesgo, conforme a la misma normativa, no puede ser inferior al patrimonio mínimo y deberá ser respaldado con las inversiones señaladas en el artículo 21. Y dice que el objeto de esta regulación es establecer un patrimonio mínimo para que una compañía de seguros pueda existir y funcionar.

Precisa, que también la ley exige que, para cumplir con sus obligaciones, las compañías de seguro deben constituir reservas técnicas, esto es independiente de los depósitos que mantengan en cuenta corriente, y deberán ser respaldados por inversiones en determinados instrumentos. Y que son titulares absolutos del dominio de los bienes que adquieren o valores que perciben a título de prima o precio, que es el caso de las rentas vitalicias. Y luego define los contratos de renta vitalicia, afirmando que mantiene vigentes 82.403 contratos de este tipo.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BCPGXXXJJWX

Fundamenta bajo estos supuestos, y conforme a las normas de derecho civil y constitucional, que la reclamante es titular del derecho de propiedad sobre las cosas incorporales, que en este caso son los derechos emanados de los contratos de renta vitalicia que suscribe, teniendo estos un estatuto inviolable, no siendo procedente establecer derechos u obligaciones adicionales o ajenas al estatuto perfeccionado, siendo intangible debido al respeto de la voluntad de las partes.

Argumenta que la reclamada desconociendo el principio de intangibilidad, al consagrar un derecho a un anticipo o adelanto de la renta asociada al contrato de renta vitalicia con cargo a la respectiva reserva técnica, elemento ajeno -el anticipo- a esta clase de contrato y que, por ende, afecta el derecho de propiedad asegurado en la Constitución, además de la protección brindada por el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución Política.

Pide tener por interpuesto el reclamo, y dejar sin efecto el oficio circular individualizado, con costas.

**Segundo:** Que el 8 de junio de 2021 el Consejo de Defensa del Estado, representado por Ruth Israel López, evacuó informe solicitando el rechazo del reclamo.

Plantea como cuestión previa, la excepción de ausencia de ilegalidad o inconstitucionalidad del Oficio Circular N° 1208, en tanto lo que la reclamante sostiene es que este materializó el mandato constitucional, esto es la modificación efectuada por la Ley N° 21.330, siendo esta el objeto de su reproche.

Resume, luego el contexto e hitos de la reforma constitucional y de la crisis sanitaria que llevó a la dictación de la reforma que permite el anticipo por parte de pensionados de rentas vitalicias.

Fundamenta que la forma de operación del mecanismo de anticipo de rentas descarta una lesión patrimonial especialmente intensa, dado que se estableció un monto de compensación al anticipo consistente en *“se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado”*. No habiendo una exigencia de gratuidad a las compañías



de seguro. Por lo que solo se trata de un anticipo de las pensiones, es decir, pagar antes de lo que se debía pagar, traduciéndose el mecanismo en una menor pensión futura, pero también en una menor deuda futura respecto de los pensionados. Y reprocha que omite cualquier referencia al artículo 64 del D.L. N° 3.500 que ya preveía en anticipo de la fecha de inicio de pago de rentas vitalicias. Por otra parte, que la reserva técnica, también, va disminuyendo mes a mes en virtud de los pagos efectuados, siendo esta solo una representación de la deuda, y no una suma de dineros o activos.

Dice, en por otra parte, la improcedencia de cuestionar oblicuamente una reforma constitucional por medio de esta acción constitucional. Y que los actos recurridos fueron dictados conforme a la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, que puede emitir normas de carácter general, circulares, oficios circulares y resoluciones.

Imputa que no se establece con claridad la normativa infringida y la forma que se ha producido la infracción que la reclamante atribuye. No existiendo un perjuicio acreditable, no siendo la mera enunciación del mismo suficiente, además que la misma reforma estableció el modo de compensación del anticipo que pudiera solicitarse por cada pensionado. Además, que no hay norma que pueda como impugnarse como ilegal debido a su errada aplicación, por lo que debería declararse inadmisibile el reclamo.

Sostiene por otra parte la inexistencia de perjuicio acreditable, no siendo suficiente la mera apreciación que hace la reclamante, siendo especulativas sus afirmaciones.

Explica que la invalidación que pide sería ineficaz y no se puede revertir la orden expresa que la Constitución ha dado a la reclamada. Ajustándose la actuación de la reclamada a lo dispuesto por la Constitución Política de la República.

Agrega que no existe actuación de la reclamada contraria a la Constitución en la dictación del acto reclamado, dado que se dictó justamente al amparo de la Ley N° 21.330, y para el cumplimiento de dicho cuerpo normativo.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BCPGXXXJJWX

Pide en definitiva el rechazo del reclamo de ilegalidad con costas.

**Tercero:** Que el 18 de marzo de 2022, el Excmo. Tribunal Constitucional remitió a estos autos fallo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad conocido bajo el ingreso N° 11230-21-INA de 17 de marzo de 2022, interpuesto por Bice Vida Compañía de Seguros S.A. el cual acogió por mayoría la inaplicabilidad planteada, declarando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo único, incisos 12°, 13° y 14° de la Ley N° 21.330, que modifica la Carta Fundamental.

**Cuarto:** El artículo 70 de la Ley N° 21.000, en lo pertinente, establece que: *“Las personas que estimen que una norma de carácter general, instrucción, comunicación, resolución o cualquier otro acto administrativo emanado del Consejo, del presidente de la Comisión o del fiscal, según corresponda, distinto de aquellos a los que se refiere el artículo siguiente, es ilegal y les causa perjuicio, podrán presentar reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.*

*El reclamo de ilegalidad deberá interponerse dentro del plazo de diez días hábiles computado de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, contado desde la notificación o publicación del acto que rechaza total o parcialmente el recurso de reposición o desde que ha operado el silencio negativo al que se refiere el inciso tercero del artículo 69.*

*Si la Corte de Apelaciones declarare admisible el reclamo, dará traslado de éste por seis días hábiles notificando esta resolución por oficio.”*

**Quinto:** De lo anterior se puede inferir que el acto cuya ilegalidad se reclama por la presente vía, esto es el Oficio Circular N° 1208 de 30 de abril de 2021, cuya emisión fue acordada por el Consejo en Sesión Extraordinaria N° 102 de la misma fecha, y ejecutado por la Resolución Exenta N° 2.340 también de dicho día, cumple con las características que la norma precitada exige para ser objeto del presente reclamo de ilegalidad.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BCPGXXXJJWX

**Sexto:** Pues bien, cabe recordar que dicho Oficio Circular N° 1.208 se origina como consecuencia de lo establecido en los incisos pertinentes del artículo único introducido a la Carta Fundamental por la Ley N° 21.330, normativa dictada para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales y anticipo de rentas vitalicias, en las condiciones que indica, conocida comúnmente como “Ley del Tercer Retiro”.

Así, la referida ley agregó, como nueva disposición quincuagésima transitoria, a la Constitución Política de la República, disponiendo en los incisos 12, 13 y 14, atinentes a lo que nos ocupa, lo siguiente:

*“A partir de la publicación en el Diario Oficial de esta reforma y hasta los 365 días siguientes, los pensionados o sus beneficiarios por renta vitalicia podrán, por una sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al diez por ciento del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope máximo de ciento cincuenta unidades de fomento.*

*El retiro que efectúen los pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo, se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado.*

*Las reglas relativas a la intangibilidad y naturaleza de estos recursos, la tramitación de la solicitud, el pago de pensiones de alimentos impagas y la información a las autoridades correspondientes, incluida la Comisión para el Mercado Financiero, contenidas en los incisos precedentes de esta disposición, serán aplicables a las solicitudes de anticipos que efectúen los pensionados o sus beneficiarios por rentas vitalicias. Con todo, el pago de los fondos solicitados se efectuará al pensionado o sus beneficiarios en un plazo máximo de treinta días corridos, contados desde la recepción de la solicitud. La Comisión para el Mercado Financiero dictará las instrucciones necesarias para la aplicación de los incisos precedentes.”*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BCPGXXXJWX



**Séptimo:** Como ya se indicó en el motivo tercero de esta sentencia, la reclamante, durante la tramitación del presente reclamo de ilegalidad, dedujo ante el Excmo. Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad de los incisos 12, 13 y 14 de la disposición quincuagésima transitoria de la Carta Fundamental, antes reproducidos.

Mediante sentencia ya referida se acogió el mentado requerimiento, declarando la inaplicabilidad, por inconstitucionalidad de los incisos antes referidos.

En este escenario, entonces, conforme al artículo 93 N° 6 e inciso 11 del mismo precepto de la Carta Fundamental, esta Corte no puede considerar, bajo ninguna circunstancia, los incisos 12, 13 y 14 del artículo único de la Ley N° 21.330, pues la sentencia estimatoria de inaplicabilidad así lo dispuso, sentencia que por cierto es vinculante y produce el efecto de cosa juzgada en la presente causa.

**Octavo:** Ergo, siendo el Oficio Circular N° 1.208 consecuencia de lo dispuesto en los incisos 12, 13 y 14 del artículo único de la Ley N° 21.330, dicho acto administrativo ha quedado sin sustento normativo, por lo que su dictación deviene en ilegal, por la imposibilidad de aplicar a las compañías de seguros las situaciones que esa regla contempla, toda vez que el Excmo. Tribunal Constitucional declaró inaplicables los mentados incisos de dicha Ley, en lo antes pormenorizado, cuyo contexto es precisamente el objeto de la regulación contemplada en el Oficio Circular N° 1.208, decisión jurisdiccional que, al tenor de los artículos 91 y 92 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, es vinculante en esta sede jurisdiccional.

**Noveno:** Consecuencia de lo anterior, resulta inoficioso ponderar el resto de las disposiciones citadas en el reclamo de ilegalidad, habida cuenta que al carecer de sustento normativo el citado Oficio Circular N° 1.208, por las razones antedichas, esas consideraciones son innecesarias.

**Décimo:** Del mismo modo, los argumentos vertidos por la CMF, al contestar el presente reclamo radican, en lo principal, en ser consecuencia de lo que dispone la norma transitoria constitucional



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BCPGXXXJJWX

antedicha, en los mentados incisos 12, 13 y 14, argumento que ya no tiene respaldo alguno, a la luz de la sentencia estimatoria de inaplicabilidad, antes comentada.

**Undécimo:** Por consiguiente, debe acogerse el reclamo de ilegalidad en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por las razones anteriores y con lo dispuesto en los artículos 93 N° 6 y 94 de la Constitución Política; artículos 91 y 92 del D.F.L. N° 5 de 2010, Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y artículo 70 de la Ley N° 21.000, se **acoge** el reclamo de ilegalidad deducido por Bice Vida Compañía de Seguros S.A. y en consecuencia se deja **sin efecto** el Oficio Circular N° 1.208 de 30 de abril de 2021, acordada por el Consejo de la CMF en Sesión Extraordinaria N° 102 de la misma fecha, y ejecutado por la Resolución Exenta N° 2.340 también de dicho día, por carecer de sustento normativo.



Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

**Contencioso-Administrativo N°263-2021.**

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Jorge Zepeda Arancibia, señora Marisol Rojas Moya y señor Tomás Gray Gariazzo, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

 <b>JORGE LUIS Zepeda ARANCIBIA</b> Ministro Corte de Apelaciones Quince de julio de dos mil veinticuatro 15:19 UTC-4		 <b>Marisol Andrea Rojas Moya</b> Ministro Corte de Apelaciones Quince de julio de dos mil veinticuatro 13:01 UTC-4	
--	---	---	---



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BCPGXXXJJWX

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Marisol Andrea Rojas M. Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a quince de julio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BCPGXXXJJWX

C.A. de Santiago

Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que el 13 de mayo de 2021 comparece Mauricio Balbontín O’Ryan, en representación de **4 Life Seguros de Vida S.A.**, y conforme el artículo 70 de la Ley N° 21.000 de 2017, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la **Comisión para el Mercado Financiero** (CMF), por estimar que el acto administrativo correspondiente al Oficio Circular N° 1.208 de 30 de abril de 2021, cuya emisión fue acordada por el Consejo en sesión extraordinaria N° 102 de la misma fecha, y ejecutado por la Resolución Exenta N° 2.340 también de dicho día, es ilegal y causa perjuicio a la reclamante.

Contextualiza que la reclamante es una compañía de seguros de vida con 7 años de experiencia, y que participa en un mercado donde intervienen 35 compañías de seguro; que desarrolla como producto previsional el de rentas vitalicias, cuya recaudación en 2020 fue de 586.023 unidades de fomento, teniendo una participación de mercado del 1.46%, con 6.889 clientes de rentas vitalicias, administrando e invirtiendo activos por 19.7 millones de unidades de fomento a marzo de 2021.

Señala que en el desarrollo del giro las compañías están expuestas a diversas clases de riesgos financieros, entre los cuales están los riesgos de mercado incidido principalmente por factores del mercado de valores, riesgos de descalce, por motivo de inversiones distintas a la deuda, que produzca un descalce entre activos y pasivos y riesgos de liquidez, derivado de la incapacidad para obtener fondos para asumir el flujo de pago sin incurrir en pérdidas significativas. En cuanto a todos los riesgos, existe normativa sectorial que establecen medidas y obligaciones para mitigarlos.

Relata, por otra parte, que mediante la Ley N° 21.330 se reguló un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales y de anticipo de rentas vitalicias, agregando un artículo transitorio, el 50° a



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DFBEXRJWX

la Constitución Política. En lo que respecta al reclamo, dicha normativa dispuso que los pensionados de rentas vitalicias tenían derecho a solicitar a la compañía de seguros con la que hubieran contratado, un adelanto del pago de sus rentas, por una sola vez y de forma voluntaria, de hasta el 10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía para cubrir el pago de sus pensiones, el cual se devuelve o restituye mediante la imputación al monto mensual de rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que lo represente.

Ahonda que el monto de renta mensual se encuentra estrechamente vinculado a diversos factores entre los que están los recursos acumulados, las expectativas de vida y las tasas de interés para la inversión de recursos. Además, que junto con celebrarse el monto de renta vitalicia y recibida la prima única, la compañía conforma lo que se denomina reserva técnica que estará integrada por la prima única y un aporte adicional que efectúa la propia compañía con su patrimonio, para conformar una reserva o capital que garantice la rentabilidad suficiente para pagar la renta vitalicia. Encontrándose este procedimiento regulado en el artículo 20 del D.F.L. N° 251.

Argumenta que el oficio reclamado adolece de diversas ilegalidades, en primer lugar, infracción al artículo 20 N° 3 de la Ley N° 21.000 que dispone: “*Artículo 20.- Corresponderá al Consejo: 3. Dictar normas de carácter general, circulares, oficios circulares y otras resoluciones que se requieran. La normativa que se imparta deberá contener los fundamentos que hagan necesaria su dictación, incluyendo una definición adecuada del problema que se pretende abordar, la justificación de la intervención regulatoria, la evaluación del impacto de dicha regulación, así como aquellos estudios o informes en que se apoye, en los casos que corresponda o sea posible. Dicha normativa deberá ser objeto de una consulta pública. Con dicho propósito, antes de la dictación de ésta, se dará a conocer el proyecto de norma en la página web de la Comisión, disponiéndose los mecanismos necesarios para que los interesados*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DFBEXXRJJWX

*puedan formular observaciones a éste. La Comisión, por resolución fundada, podrá excluir de los trámites contemplados en el párrafo anterior aquella normativa que, atendida su urgencia, requiera de aplicación inmediata. Con todo, en dichos casos una vez que se haya dictado la norma, la Comisión deberá elaborar el informe de evaluación de impacto regulatorio correspondiente. Del mismo modo, no se requerirán los trámites contemplados en el párrafo primero del presente numeral cuando la Comisión, por resolución fundada, estime que estos resultan impracticables, innecesarios o contrarios al interés público.”*

Precisa que esta norma impone el deber de consulta pública para la dictación de las normas que se individualizan, y que solo se puede omitir el trámite de previa consulta, cuando existe calificación fundada por parte de la reclamada, y solo en aquellos casos que por su naturaleza y urgencia fuera necesaria su aplicación inmediata. Y en el caso particular no se hizo la consulta pública, ni se dictó resolución fundada que justifique la falta de la misma, razón suficiente para acoger el reclamo.

Adiciona a lo anterior, que según la misma normativa, la reclamada deberá para la emisión del acto dar los fundamentos que hagan necesaria su dictación, definiendo el problema y la evaluación de impacto de dicha regulación, requisitos que de fondo no cumple el oficio reclamado. Cita, para ese efecto, el Ingreso Corte Suprema N° 20.713-2020.

Arguye como perjuicio de la actuación de la reclamada que la reclamante no pudo representar errores e infracciones cometidas por el oficio reclamado y a la vez poder entender el sentido y alcance de la regulación.

Reclama en segundo lugar, la infracción a la Ley N° 21.330, artículo 20 del D.F.L. N° 251, la Circular N° 1512 de 2 de enero de 2001 y a la regulación de facultades de la CMF establecidas en el artículo 1 inciso segundo y artículo 5 N° 1 de la Ley N° 21.000, ya que la reforma constitucional dispuso se la solicitud de anticipo es sobre la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros, y de forma arbitraria e ilegal, el oficio



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DFBEXXRJJWX

reclamado dispuso que “*La reserva a considerar, en consistencia con la Circular N° 2.062, será la reserva técnica base.*” Siendo clara la Ley N° 21.330 al referir que el anticipo se calcula sobre la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros, la que está conformada con el capital del afiliado o prima única, y no aquella parte que no mantiene el pensionado sino que es un aporte de la compañía. Produciendo lo anterior un perjuicio a la reclamante al aumentarse la base de lo que puede ser anticipado.

Aclara que a la fecha han efectuado solicitud de anticipo 1.077 pensionados, por un total de 137.000 unidades de fomento, representando un 16% de los pensionados y un 17% del total de la reserva técnica base susceptible de anticiparse.

Estima que un 4% corresponde a aportes de la compañía, que representa aproximadamente \$162.000.000

Argumenta, en tercer término la infracción al N° 7 de la Norma de Carácter General N° 208 de 2007 de la reclamada, artículo 20 del D.F.L. N° 251 y a las normas sobre facultades de la CMF contenidas en el artículo 1 inciso 2 y artículo 5 número 1 de la Ley N° 21.000, ya que el oficio reclamado, omite instruir y considerar en la imputación al monto mensual de rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado a más de la tasa de reserva, una tasa de mercado o rentabilidad de mercado, calculada sobre el monto del anticipo, adelanto o empréstito efectuado, sobre todo cuando que conforme al artículo 12 de la Ley N° 18.010 la gratuidad no se presume.

Pide en definitiva dejar sin efecto el acto reclamado, en todas sus partes, debiendo la reclamada dictar un nuevo oficio circular en que rectifique y enmiende las ilegalidades cometidas, en el sentido expuesto en el reclamo, con expresa condena en costas.

**Segundo:** Que el 16 de junio de 2021 el Consejo de Defensa del Estado, representado por Ruth Israel López, evacuó informe solicitando el rechazo del reclamo.

Sostiene en primer término ausencia de ilegalidad del Oficio Circular N° 1208, al ser una instrucción de carácter eminentemente



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DFBEXXRJJWX

operativa, que tiene por objeto facilitar la implementación de la Ley N° 21.300. Reprochando la reclamante que la CMF no se haya inmiscuido en los tópicos regulados por la Constitución, por ejemplo debiendo haber establecido una tasa de interés de mercado por el adelanto. Y acusa haber olvidado la reclamante la naturaleza jurídica de lo regulado, al no tratarse en la especie de una operación de crédito de dinero. Luego resume los hitos legislativos de la reforma constitucional y también con posterioridad el contexto de emergencia sanitaria que motivó la reforma indicada.

Aduce que el acto reclamado fue dictado por expreso mandato constitucional, la cual es suficiente en el detalle de la base de cálculo del anticipo, el monto a anticipar y la fecha de pago, no innovando el oficio circular N° 1208.

Explica que la reserva técnica de las rentas vitalicias se calcula mes a mes para cada contrato, considerando diversos factores, entre los cuales están la pensión comprometida pagar y la expectativa de vida. Y que el acto reclamado, uniforma la implementación operativa del proceso de adelanto del pago de renta vitalicia dando diversas instrucciones conforme al mandato constitucional. Y sostiene nuevamente que el reproche es no haber innovado en las materias que el constituyente reguló.

Fundamenta que la forma de operación del mecanismo de anticipo de rentas descarta una lesión patrimonial especialmente intensa, dado que se estableció un monto de compensación al anticipo consistente en *“se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado”*. No habiendo una exigencia de gratuidad a las compañías de seguro. Por lo que solo se trata de un anticipo de las pensiones, es decir, pagar antes de lo que se debía pagar, traducándose el mecanismo en una menor pensión futura, pero también en una menor deuda futura respecto de los pensionados.

Reprocha que omite la reclamante cualquier referencia al artículo 64 del D.L. N° 3.500 que ya preveía en anticipo de la fecha de inicio de pago de rentas vitalicias. Por otra parte, que la reserva



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DFBEXXRJJWX



técnica, también, va disminuyendo mes a mes en virtud de los pagos efectuados, siendo esta solo una representación de la deuda, y no una suma de dineros o activos.

Alega, en por otra parte, la improcedencia de cuestionar oblicuamente una reforma constitucional por medio de esta acción constitucional. Y que los actos recurridos fueron dictados conforme a la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, que puede emitir normas de carácter general, circulares, oficios circulares y resoluciones.

Aduce que no existe infracción a la normativa de reservas técnicas, sin embargo, aclara que estas no son sumas de dineros o activos, sino representación de una deuda de cada contrato de seguro, por tanto no se compone de aportes de la compañía y de aportes del asegurado, sino que es una representación de la deuda para con el pensionado de renta vitalicia, no existiendo lo indicado como reserva de fondos del pensionado.

Sostiene que resulta improcedente la alegación de establecer una tasa de interés por vía administrativa, esto es mediante la dictación de actos de la reclamada para la compensación de los anticipos de pensionados, lo cual además, ya estaría resuelto por la normativa constitucional reformada. También imputa que no se establece con claridad la normativa infringida y la forma que se ha producido la infracción que la reclamante atribuye. No existiendo un perjuicio acreditable, no siendo la mera enunciación del mismo suficiente, además que la misma reforma estableció el modo de compensación del anticipo que pudiera solicitarse por cada pensionado.

Explica que la invalidación que pide sería ineficaz y no se puede revertir la orden expresa que la Constitución ha dado a la reclamada. Ajustándose la actuación de la reclamada a lo dispuesto por la Constitución Política de la República.

Pide en definitiva el rechazo del reclamo de ilegalidad con costas.

**Tercero:** Que el 2 de mayo de 2022, el Excmo. Tribunal Constitucional remitió a esta Corte fallo del requerimiento de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DFBEXRJJWX

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, conocido bajo el ingreso N° 11560-21-INA de 26 de abril de 2022, interpuesto por 4 Life Seguros de Vida S.A. el cual acogió por mayoría la inaplicabilidad planteada, declarando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo único, incisos 12°, 13° y 14° de la Ley N° 21.330 que modifica la Carta Fundamental.

**Cuarto:** El artículo 70 de la Ley N° 21.000, en lo pertinente, establece que: *“Las personas que estimen que una norma de carácter general, instrucción, comunicación, resolución o cualquier otro acto administrativo emanado del Consejo, del presidente de la Comisión o del fiscal, según corresponda, distinto de aquellos a los que se refiere el artículo siguiente, es ilegal y les causa perjuicio, podrán presentar reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.*

*El reclamo de ilegalidad deberá interponerse dentro del plazo de diez días hábiles computado de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, contado desde la notificación o publicación del acto que rechaza total o parcialmente el recurso de reposición o desde que ha operado el silencio negativo al que se refiere el inciso tercero del artículo 69.*

*Si la Corte de Apelaciones declarare admisible el reclamo, dará traslado de éste por seis días hábiles notificando esta resolución por oficio.”*

**Quinto:** De lo anterior se puede inferir que el acto cuya ilegalidad se reclama por la presente vía, esto es el Oficio Circular N° 1208 de 30 de abril de 2021, cuya emisión fue acordada por el Consejo en Sesión Extraordinaria N° 102 de la misma fecha, y ejecutado por la Resolución Exenta N° 2.340 también de dicho día, cumple con las características que la norma precitada exige para ser objeto del presente reclamo de ilegalidad.

**Sexto:** Pues bien, cabe recordar que dicho Oficio Circular N° 1.208 se origina como consecuencia de lo establecido en los incisos pertinentes del artículo único introducido a la Carta Fundamental por la Ley N° 21.330, normativa dictada para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales y anticipo



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DFBEXXRJJWX

de rentas vitalicias, en las condiciones que indica, conocida comúnmente como “Ley del Tercer Retiro”.

Así, la referida ley agregó, como nueva disposición quincuagésima transitoria, a la Constitución Política de la República, disponiendo en los incisos 12, 13 y 14, atinentes a lo que nos ocupa, lo siguiente:

*“A partir de la publicación en el Diario Oficial de esta reforma y hasta los 365 días siguientes, los pensionados o sus beneficiarios por renta vitalicia podrán, por una sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al diez por ciento del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope máximo de ciento cincuenta unidades de fomento.*

*El retiro que efectúen los pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo, se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado.*

*Las reglas relativas a la intangibilidad y naturaleza de estos recursos, la tramitación de la solicitud, el pago de pensiones de alimentos impagas y la información a las autoridades correspondientes, incluida la Comisión para el Mercado Financiero, contenidas en los incisos precedentes de esta disposición, serán aplicables a las solicitudes de anticipos que efectúen los pensionados o sus beneficiarios por rentas vitalicias. Con todo, el pago de los fondos solicitados se efectuará al pensionado o sus beneficiarios en un plazo máximo de treinta días corridos, contados desde la recepción de la solicitud. La Comisión para el Mercado Financiero dictará las instrucciones necesarias para la aplicación de los incisos precedentes.”*

**Séptimo:** Como ya se indicó en el motivo tercero de esta sentencia, la reclamante, durante la tramitación del presente reclamo de ilegalidad, dedujo ante el Excmo. Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad de los



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DFBEXXRJJWX

incisos 12, 13 y 14 de la disposición quincuagésima transitoria de la Carta Fundamental, antes reproducidos.

Mediante sentencia ya referida se acogió el mentado requerimiento, declarando la inaplicabilidad, por inconstitucionalidad de los incisos antes referidos.

En este escenario, entonces, conforme al artículo 93 N° 6 e inciso 11 del mismo precepto de la Carta Fundamental, esta Corte no puede considerar, bajo ninguna circunstancia, los incisos 12, 13 y 14 del artículo único de la Ley N° 21.330, pues la sentencia estimatoria de inaplicabilidad así lo dispuso, sentencia que -por cierto- es vinculante y produce el efecto de cosa juzgada en la presente causa.

**Octavo:** Ergo, siendo el Oficio Circular N° 1.208 consecuencia de lo dispuesto en los incisos 12, 13 y 14 del artículo único de la Ley N° 21.330, dicho acto administrativo ha quedado sin sustento normativo, por lo que su dictación deviene en ilegal, por la imposibilidad de aplicar a las compañías de seguros las situaciones que esa regla contempla, toda vez que el Excmo. Tribunal Constitucional declaró inaplicables los mentados incisos de dicha Ley, en lo antes pormenorizado, cuyo contexto es precisamente el objeto de la regulación contemplada en el Oficio Circular N° 1.208, decisión jurisdiccional que, al tenor de los artículos 91 y 92 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, es vinculante en esta sede jurisdiccional.

**Noveno:** Consecuencia de lo anterior, resulta inoficioso ponderar el resto de las disposiciones citadas en el reclamo de ilegalidad, habida cuenta que al carecer de sustento normativo el citado Oficio Circular N° 1.208, por las razones antedichas, esas consideraciones son innecesarias.

**Décimo:** Del mismo modo, los argumentos vertidos por la CMF, al contestar el presente reclamo radican, en lo principal, en ser consecuencia de lo que dispone la norma transitoria constitucional antedicha, en los mentados incisos 12, 13 y 14, argumento que ya no tiene respaldo alguno, a la luz de la sentencia estimatoria de inaplicabilidad, antes comentada.



**Undécimo:** Por consiguiente, debe acogerse el reclamo de ilegalidad en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por las razones anteriores y con lo dispuesto en los artículos 93 N° 6 y 94 de la Constitución Política; artículos 91 y 92 del D.F.L. N° 5 de 2010, Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y artículo 70 de la Ley N° 21.000, se **acoge** el reclamo de ilegalidad deducido por 4 Life Seguros de Vida S.A. y en consecuencia se deja **sin efecto** el Oficio Circular N° 1.208 de 30 de abril de 2021, acordado por el Consejo de la CMF en Sesión Extraordinaria N° 102 de la misma fecha, y ejecutado por la Resolución Exenta N° 2.340 también de dicho día, por carecer de sustento normativo.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

**Contencioso-Administrativo N°264-2021.**

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Jorge Zepeda Arancibia, señora Marisol Rojas Moya y señor Tomás Gray Gariazzo, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

 <b>JORGE LUIS Zepeda ARANCIBIA</b> Ministro Corte de Apelaciones Quince de julio de dos mil veinticuatro 15:19 UTC-4		 <b>Marisol Andrea Rojas Moya</b> Ministro Corte de Apelaciones Quince de julio de dos mil veinticuatro 13:01 UTC-4	
--	---	---	---



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DFBEXRJJWX

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Marisol Andrea Rojas M. Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a quince de julio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DFBEXXRJJWX

C.A. de Santiago

Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que el 2 de junio de 2021 comparece Gerardo Laymus Heilmaier y Francisco Javier Errázuriz Ovalle, en representación de Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A., y conforme el artículo 70 de la Ley N° 21.000 de 2017, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por diversas ilegalidades consistentes en la dictación del Oficio Circular N° 1.208, impartido a partir de la Resolución Exenta N° 2.340 de igual fecha, que ejecuta el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria N° 233 de 30 de abril de 2021; la dictación de la Norma de Carácter General N° 453, impartida por Resolución Exenta N° 2.328 de 30 de abril de 2021, que ejecuta acuerdo adoptado por el Consejo en Sesión Ordinaria N° 233 de 29 de abril de 2021; y por la dictación de la Resolución Exenta N° 2.785 que ejecuta el acuerdo del Consejo adoptado en Sesión Ordinaria N° 237 de 27 de mayo de 2021, que rechaza íntegramente recursos de reposición en contra de los anteriores actos administrativos.

Previene que la Ley N° 21.330 no modificó el régimen o normativa que rige la renta vitalicia, sino que estaba dirigida a la obtención de anticipos por parte de pensionados, con topes de 10% de la reserva técnica individual o 150 unidades de fomento.

Concluye de lo anterior que la normativa que debió dictar la reclamada para la implementación de la reforma constitucional, debió sujetarse a la normativa legal y sectorial vigente que regulaba la renta vitalicia, guardando la debida armonía con esta.

Sostiene que la Ley N° 21.330 es inconstitucional por vicios de forma y fondo, contraviniendo principios fundamentales en los que se asienta el contrato de renta vitalicia, desconociendo que el beneficiado o pensionado no es dueño de la reserva técnica, además de violar el contrato, la igualdad ante la ley, la seguridad social, la libertad de desarrollar una actividad económica, el derecho de propiedad, la esencia de los derechos, entre otras garantías.

Refiere que luego de la dictación de los actos recurridos en esta causa, el 7 de mayo de 2021, la reclamante dedujo recurso de reposición en contra de los mismos, alegando: el desconocimiento de la reclamada de sus objetivos y funciones, además



Este documento tiene firma electrónica  
puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWX

o deberes; ilegalidad por exceso en el ejercicio de potestades; infracción al principio de confianza legítima, al desatender sus actuaciones ante instancias legislativas; y violación al principio de supremacía constitucional y de reserva legal.

Enfatiza que el 28 de mayo de 2021 se notificó la Resolución Exenta N° 2785 y el acuerdo adoptado por el Consejo de la CMF, en que se rechaza en todas sus partes el recurso de reposición aludido con anterioridad, sin hacerse cargo de las alegaciones y antecedentes dispuestos, limitándose a señalar como único fundamento que la competencia está delimitada a aplicar y hacer cumplir la reforma constitucional introducida por la Ley N° 21.330.

Expone, a continuación, una serie de conceptos relevantes a su entender, entre los cuales están los de rentas vitalicias, otras modalidades de pensión, contrato de renta vitalicia y patrimonio de las compañías aseguradoras.

**Argumenta como primera ilegalidad**, el exceso de la Comisión para el Mercado Financiero en el ejercicio de sus atribuciones, al ampliar la titularidad del derecho consagrado en la reforma constitucional; utilizar la renta técnica base para el pago del derecho indicado sin distinción de aquella parte de la reserva legal que corresponde a los fondos de cuenta individual y la provisión que efectúan las compañías aseguradoras para su complementación; establecer la gratuidad en el derecho de retracto del afiliado; consagrar una campaña comunicacional masiva a costo de la compañía aseguradora.

Explica en cuanto a la ampliación de la titularidad, que los titulares de los derechos de la reforma constitucional son los pensionados y beneficiarios, y que conforme a dicha definición estos son aquellos que ya han recibido el pago de renta vitalicia. Sin embargo, la Resolución Exenta N° 2.785 expande dicho ámbito al comprender aquellos afiliados de renta vitalicia diferida, siendo lo anterior contrario a la Ley N° 21.330, artículo 5 numeral 1° de la Ley N° 21.000 y atentar contra la estabilidad y desarrollo del mercado financiero conforme al artículo 1 de la misma ley. A la vez, sería una conculcación de los artículos 6, 7 y 19 N° 24 de la Constitución Política y de la Ley N° 18.575.

Agrega, en cuanto a los perjuicios, que han tenido que endeudarse las compañías de seguro; por lo mismo la Norma de Carácter General N° 453, que aumenta los niveles



Este documento tiene firma electrónica  
puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWX



permitidos a las compañías para hacer frente a los pagos, no es normativamente inocua y demostraría lo sostenido por la reclamante.

Relata sobre la utilización de la renta técnica base para el pago del derecho consagrado en la reforma constitucional que la reclamada por medio de los actos reclamados, desatendiendo el tenor de la reforma, utilizó el término “*reserva técnica base*”, concepto distinto y recogido en la Circular N° 1512 de la reclamada, que abarca los fondos provenientes del afiliado y los aportados por la compañía de seguro, lo cual infringe la reforma constitucional y los artículos 1 y 5 de la Ley N° 21.000.

También reclama que la CMF por medio de su Circular N° 1208 impuso que el costo de la implementación de la reforma constitucional es de las compañías de seguro e impuso la gratuidad en el derecho a retracto, lo cual sería contrario a las facultades y competencias que tiene la reclamada, en sustento de los mismos cuerpos normativos citados.

**Imputa como segunda ilegalidad**, el desconocimiento de la reclamada de sus objetivos y funciones, además de la omisión del ejercicio de sus potestades y deberes, lo cual sería contrario a los artículos 1 y 5 de la Ley N° 21.000, artículo único de la Ley N° 21.330, en relación a los artículos 6, 7, 19 N° 2, 21, 24 y 26 de la Constitución, artículo 1545 del Código Civil y lo señalado en el artículo 2 de la Ley N° 18.575, además de normativa sectorial. Todo esto al no reconocer los vicios de ilegalidad y de inconstitucionalidad y no tomar medidas de mitigación de daños.

Sostiene que desatendió el mandato de la Ley N° 21.330 en cuanto no solo debía implementarla, sino también atender a los vicios que adolecía y las consecuencias patrimoniales que generaría, a la vez, que omitió regular las hipótesis para el debido reintegro, ni se hace cargo de los detrimentos que se generarían en las inversiones. Suma a sus argumentos, que al determinar la fórmula de recálculo, no incorporó aquella tasa de rentabilidad de mercado o equivalente en la hipótesis de invertir el capital que son objeto de anticipo.

**Denuncia como tercera ilegalidad** la infracción a las Leyes N° 19.880 y N° 18.757 y las disposiciones de la Constitución Política de los artículos 6, 7, 19 N° 2 y 3, además del artículo 20 N° 3 de la Ley N° 21.000, la falta de fundamentación y motivación de los actos impugnados. Tanto por la carencia de fundamentación como por no



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWX

haberse sometido el Oficio Circular N° 1208 a consulta previa, contraviniéndose el artículo 20 N° 3 de la Ley N° 21.000.

**Acusa como cuarta ilegalidad**, la infracción al principio de confianza legítima, en relación con los artículos 5, 6, 7, 7, 19 N° 24 y 26 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley N° 18.575, al desatender la reclamada las normas de inversión que se imponen a las compañías de seguro, además de desatender el objetivo de las mismas.

**Sostiene como quinta y última ilegalidad** la infracción del principio de supremacía constitucional, reserva legal y vulneración de derechos fundamentales. Precisa que la afectación de dominio o modificaciones del régimen previsional son materias de ley y no de reforma constitucional, mucho menos de una disposición transitoria vigente desde hace 40 años, debiendo la reclamada haberse pronunciado en defecto de la ley, y no hacerlo por medio de un acto administrativo, al regular la aplicación inmediata de una norma constitucional, sobrepasando la potestad reglamentaria.

Pide en definitiva, declarar la ilegalidad de los actos reclamados y disponer se dejen sin efecto, con costas.

**Segundo:** Que el 22 de junio de 2021 el Consejo de Defensa del Estado, representado por Ruth Israel López, evacuó informe solicitando el rechazo del reclamo.

Como cuestión preliminar, señala que el reclamo afirma que una norma constitucional es inconstitucional, lo cual sería uno de las innumerables afirmaciones de esta índole que se sostienen en el reclamo.

En primer término, sostiene que no hay ilegalidad del Oficio Circular N° 1208, al ser una instrucción de carácter eminentemente operativa, que tiene por objeto facilitar la implementación de la Ley N° 21.300, reprochando la reclamante que la CMF no se inmiscuyó en los tópicos regulados por la Constitución. Luego resume los hitos legislativos de la reforma constitucional y también con posterioridad el contexto de emergencia sanitaria que motivó la reforma indicada.

Fundamenta que la forma de operación del mecanismo de anticipo de rentas descarta una lesión patrimonial especialmente intensa, dado que se estableció un monto de compensación al anticipo consistente en *“se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto de las rentas vitalicias futuras”*.



Este documento tiene firma electrónica  
puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWXX

*retirado*”, no habiendo una exigencia de gratuidad a las compañías de seguro.

Por lo anterior, solo se trata de un anticipo de las pensiones, es decir, pagar antes de lo que se debía pagar, traducíéndose el mecanismo en una menor pensión futura, pero también en una menor deuda futura respecto de los pensionados. Reprocha que omite cualquier referencia al artículo 64 del D.L. N° 3.500 de 1980, que ya preveía un anticipo de la fecha de inicio de pago de rentas vitalicias. Por otra parte, indica que la reserva técnica, también, va disminuyendo mes a mes en virtud de los pagos efectuados, siendo esta solo una representación de la deuda, y no una suma de dineros o activos.

Alega, por otra parte, la improcedencia de cuestionar oblicuamente una reforma constitucional por medio de esta acción constitucional. Los actos recurridos fueron dictados conforme a la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, que puede emitir normas de carácter general, circulares, oficios circulares y resoluciones.

Contesta que no hay un perjuicio acreditable conforme al tenor del reclamo, no resultando suficiente meras afirmaciones.

Explica que la invalidación que pide sería ineficaz y no se puede revertir la orden expresa que la Constitución ha dado a la reclamada, ajustándose la actuación de la reclamada a lo dispuesto por la Constitución Política de la República.

Aduce que el acto reclamado fue dictado por expreso mandato constitucional, la cual es suficiente en el detalle de la base de cálculo del anticipo, el monto a anticipar y la fecha de pago, no innovando el oficio circular N° 1208.

Fundamenta en cuanto a la gratuidad del retractor, que la norma de la reforma constitucional es clara al no establecer costo para quien se desiste del adelanto, no debiendo atribuirse el sentido contrario.

Argumenta que no hay exceso en el ejercicio de atribuciones de la reclamada, en relación al Oficio Circular N° 1.208 y la Resolución Exenta N° 2.785 que rechazó la reposición, dado que no existe una expansión ilegal del ámbito de titulares del decreto consagrado por la reforma constitucional, al amparar a aquellos que se encuentran en la situación de renta vitalicia diferida, al no hacer distinción la normativa objetada.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWX

Aduce que tampoco existe infracción a la normativa de reservas técnicas; sin embargo, aclara que estas no son sumas de dineros o activos, sino representación de una deuda de cada contrato de seguro, por tanto no se compone de aportes de la compañía y de aportes del asegurado, sino que es una representación de la deuda para con el pensionado de renta vitalicia, no existiendo lo indicado como reserva de fondos del pensionado.

Precisa sobre los excesos supuestos relativos a la obligación de publicidad del delante de las pensiones, que la reclamada actuó dentro de sus atribuciones, conforme al artículo 5 del D.L. N° 3.538, siendo la divulgación un tema central para la transparencia del sistema, y que no se trata de publicidad sino de una obligación habitual de las compañías, siendo un ejemplo la Circular N° 2.123.

Razona que, además, no existe infracción al principio de confianza legítima, al haber actuado la reclamada conforme a los mandatos constitucionales y la normativa que la rige, no pudiendo desatender dichos cambios del ordenamiento jurídico. Además, dice que la Norma de Carácter General N° 453 es legal, en razón del endeudamiento de las compañías para el cumplimiento de lo latamente reseñado.

Niega la falta de motivación de los actos reclamados, al tenor de su mismo mérito. Y afirma la actuación dentro del ordenamiento jurídico y la Constitución.

Pide en definitiva el rechazo del reclamo de ilegalidad con costas.

**Tercero:** Que el 1 de abril de 2022, el Excmo. Tribunal Constitucional remitió a estos autos fallo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, interpuesto por Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A., conocido bajo el ingreso N° 11350-21-INA, cuya sentencia de fecha 31 de marzo de 2022, desestimó el mentado requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo único, incisos 12°, 13° y 14° de la Ley N° 21.330, que modifica la Carta Fundamental, por empate de votos.

**Cuarto:** El artículo 70 de la Ley N° 21.000, en lo pertinente, establece que: *“Las personas que estimen que una norma de carácter general, instrucción, comunicación, resolución o cualquier otro acto administrativo emanado del Consejo, del presidente de la Comisión o del fiscal, según corresponda, distinto de aquellos a los que se refiere el artículo siguiente, es ilegal y*



Este documento tiene firma electrónica  
que puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWXX

*podrán presentar reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.*

*El reclamo de ilegalidad deberá interponerse dentro del plazo de diez días hábiles computado de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, contado desde la notificación o publicación del acto que rechaza total o parcialmente el recurso de reposición o desde que ha operado el silencio negativo al que se refiere el inciso tercero del artículo 69.*

*Si la Corte de Apelaciones declarare admisible el reclamo, dará traslado de éste por seis días hábiles notificando esta resolución por oficio.”*

**Quinto:** De lo anterior se puede inferir que los actos, cuya ilegalidad se reclama por la presente vía, son: a) Oficio Circular N° 1208, impartido a partir de la Resolución Exenta N° 2340 de igual fecha, que ejecuta el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria N° 233 de 30 de abril de 2021; b) Norma de Carácter General N° 453, impartida por Resolución Exenta N° 2328 de 30 de abril de 2021, que ejecuta acuerdo adoptado por el Consejo en Sesión Ordinaria N° 233 de 29 de abril de 2021 y, c) Resolución Exenta N° 2785 que ejecuta acuerdo del Consejo adoptado en Sesión Ordinaria N° 237 de 27 de mayo de 2021, que rechaza íntegramente recursos de reposición en contra de los anteriores actos administrativos.

Conforme a la disposición legal precitada, puede inferirse que los tres actos citados en el párrafo anterior cumplen con las características que esa norma exige para ser objetos del presente reclamo de ilegalidad.

**Sexto:** Pues bien, cabe recordar que dicho Oficio Circular N° 1.208 se origina como consecuencia de lo establecido en los incisos pertinentes del artículo único introducido a la Carta Fundamental por la Ley N° 21.330, normativa dictada para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales y anticipo de rentas vitalicias, en las condiciones que indica, conocida comúnmente como “Ley del Tercer Retiro”.

Así, la referida ley agregó, como nueva disposición quincuagésima transitoria, a la Constitución Política de la República, disponiendo en los incisos 12, 13 y 14, atinentes a lo que nos ocupa, lo siguiente:

*“A partir de la publicación en el Diario Oficial de esta reforma y hasta los 365 días siguientes, los pensionados o s*



Este documento tiene firma electrónica  
puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWX

*renta vitalicia podrán, por una sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al diez por ciento del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope máximo de ciento cincuenta unidades de fomento.*

*El retiro que efectúen los pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo, se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado.*

*Las reglas relativas a la intangibilidad y naturaleza de estos recursos, la tramitación de la solicitud, el pago de pensiones de alimentos impagas y la información a las autoridades correspondientes, incluida la Comisión para el Mercado Financiero, contenidas en los incisos precedentes de esta disposición, serán aplicables a las solicitudes de anticipos que efectúen los pensionados o sus beneficiarios por rentas vitalicias. Con todo, el pago de los fondos solicitados se efectuará al pensionado o sus beneficiarios en un plazo máximo de treinta días corridos, contados desde la recepción de la solicitud. La Comisión para el Mercado Financiero dictará las instrucciones necesarias para la aplicación de los incisos precedentes.”*

**Séptimo:** Al haberse rechazado -en la presente causa- el requerimiento de inaplicabilidad deducido por la reclamante ante el Excmo. Tribunal Constitucional, relativo a los incisos precitados de la disposición quincuagésima transitoria de la Carta Fundamental, como ya se indicó en el motivo tercero de esta sentencia, para que prospere esta acción constitucional debe tenerse presente, en primer lugar que esta Corte debe analizar los diferentes motivos de ilegalidad contenidos en el reclamo, en el mismo orden que fueron presentados.

En efecto, el primero de ellos apunta a que la CMF, al dictar el Oficio Circular N° 1208, ya referida; la Norma de Carácter General N° 453, precitada y la Resolución N° 2.785, antes aludida, habría infringido un conjunto de normas vigentes, entre las que deben destacarse los artículos 6, 7, 19 N° 2, 21, 24 y 26 de la Constitución Política de la República y el artículo 5° N° 1° de la Ley N° 21.000.

**Octavo:** Como cuestión preliminar, cabe consignar que la ley N° 21.330, que es fuente de los actos administrativos,



Este documento tiene firma electrónica  
estiponados  
puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWXX

por esta vía fue en su oportunidad cuestionada en su origen, toda vez que mediante una reforma constitucional, se obvió la iniciativa presidencial que contempla el artículo 65 inciso 4°, N° 4 y N° 6 de la Carta Fundamental, esto es -en lo pertinente al N° 4- respecto de una moción parlamentaria que pretendía “... modificar pensiones, montepíos, rentas u cualquier otra clase de emolumentos (...) como asimismo fijar (...) aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos...”

Por otra parte, en lo atinente al N° 6 de la citada disposición, la norma establece que es iniciativa exclusiva del Presidente de la República: “6° Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.”

Es decir, la ley N° 21.330 es de dudosa legalidad y constitucionalidad, toda vez que, al versar su contenido en una forma distinta de pagar las rentas vitalicias, tratándose, además, de temas de seguridad social, correspondía solo al Presidente de la República su iniciativa legal, lo que no ocurrió de esa forma.

**Noveno:** Ahora bien, si dicha normativa nace al mundo jurídico de manera ilegal, pues contraría los preceptos constitucionales que el texto Fundamental establece para la formación de una ley, mal puede ostentar la categoría de una “reforma constitucional”, y debe ser tratada como una norma de rango legal.

Así se desprende, por lo demás, de lo que señala el artículo 127 inciso 3° de la Carta Fundamental, en cuanto establece “...*serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley.*”

En efecto, los ministros del Excmo. Tribunal Constitucional que estuvieron por acoger el requerimiento de inaplicabilidad deducido por la reclamante, en los considerandos 10°) a 15°) de la sentencia recaída en Rol N° 11.350-2021, sostienen, en síntesis, que el primer inconveniente para analizar la constitucionalidad de los incisos 12, 13 y 14 del artículo único de la Ley N° 21.330 es precisamente su origen viciado, por las razones dadas anteriormente.

**Décimo:** Consecuencia de lo anterior, que no es menor, surge como segundo cuestionamiento si la Comisión para el Mercado Financiero, al dictar los actos administrativos que han sido



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWX

impugnados como ilegales, actuó dentro de la órbita de sus atribuciones.

Pues bien, el artículo 5° N° 1 de la Ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, establece lo siguiente: *“La Comisión está investida de las siguientes atribuciones generales, las que deberán ser ejercidas conforme a las reglas y al quórum de aprobación que determine esta ley:*

*1. Dictar las normas para la aplicación y cumplimiento de las leyes y reglamentos y, en general, dictar cualquier otra normativa que de conformidad con la ley le corresponda para la regulación del mercado financiero. De igual modo, corresponderá a la Comisión interpretar administrativamente las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas, entidades o actividades fiscalizadas, y podrá fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para su aplicación y cumplimiento. Estas potestades no podrán extenderse en ningún caso a las facultades normativas e interpretativas que le corresponden al Banco Central de Chile de conformidad con la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 de su ley orgánica constitucional.”*

**Undécimo:** Respecto de la norma recién reproducida es claro que la CMF si bien cuenta con atribuciones para dictar instrucciones, fijar normas e impartir instrucciones, esto no puede hacerlo vulnerando legítimos derechos adquiridos por los destinatarios de esas órdenes, en particular las compañías aseguradoras.

En efecto, como se analizará más adelante, la función esencial de la CMF es la regulación del mercado financiero; por ende, no puede alterar, de mutuo propio la tangibilidad de los contratos de renta vitalicia vigentes, aún so pretexto de estar dando cumplimiento a una norma de rango constitucional.

En efecto, si la citada preceptiva tiene claros vicios en su origen, como ya se explicó en los motivos anteriores y, además, atenta contra derechos fundamentales, mal puede escudarse la CMF en que estaba obligada a dar cumplimiento a ese mandato, pues su primera obligación, conforme el artículo 1° inciso 2° de la ley N° 21.000, es “velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Para ello deberá mantener una visión general y sistémica del mercado,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWX



considerando los intereses de los inversionistas, depositantes y asegurados, así como el resguardo del interés público.”

En esa perspectiva, entonces, considerando que la disposición única de la Ley N° 21.330 altera ostensiblemente los efectos del contrato de renta vitalicia, y los desnaturaliza, obligando a las compañías de seguros a pagar a los pensionados sumas que no están previstas en el contrato, sin derecho a retorno o devolución e incorporando un falso concepto de la reserva técnica, lisa y llanamente la CMF se está alejando de sus funciones y no está regulando el mercado financiero como en rigor le corresponde.

En consecuencia, al obrar de ese modo e impartir instrucciones y normas que se alejan de la función a la cual está llamado ese órgano, la CMF no actuó conforme a derecho ni dentro de su competencia y atribuciones, pues lo que le correspondía era representar las ilegalidades contenidas en la citada Ley N° 21.330, relativas a las irregularidades que significaba para las compañías de seguros dar cobertura a lo que se había establecido en esa ley.

**Duodécimo:** Como tercer elemento de juicio, corresponde analizar la vulneración de los actos administrativos cuestionados, así como la Ley N° 21.330 al derecho de propiedad, contemplado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Es relevante para ese análisis señalar que el artículo 2.264 del Código Civil define la constitución de renta vitalicia como “un contrato aleatorio en que una persona se obliga, a título oneroso, a pagar a otra una renta o pensión periódica, durante la vida natural de cualquiera de estas dos personas o un tercero.”

Por su lado, el artículo 62 del D.L. N° 3.500 de 1980, señala que “Renta Vitalicia Inmediata es aquella modalidad de pensión que contrata el afiliado con una Compañía de Seguros de Vida, en la que esta se obliga al pago de una renta mensual, desde el momento que suscribe el contrato y hasta su fallecimiento y a pagar pensiones de sobrevivencia a sus beneficiarios...”

Por ende, el contrato de renta vitalicia es un contrato típico o nominado, con una identidad y fisonomía propias, que lo distingue de otras fórmulas convencionales. Como puede advertirse, los contratantes saben de antemano qué efectos produce el contrato de renta vitalicia, sin necesidad de cambios legislativos, pues se rigen por las leyes vigentes al momento de su otorgamiento.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWX

En este contexto, entonces, es claro que la Ley N° 21.330 alteró las características del contrato de seguro antes referido, pues desconoció que las primas pagadas ya habían ingresado legítima y definitivamente al patrimonio de las compañías aseguradoras, con las cuales éstas hicieron sus cálculos e inversiones, justamente para poder cumplir con sus compromisos a futuro.

Aún más, al disponer la Ley N° 21.330 una transferencia de recursos que ingresó al patrimonio de las aseguradoras a título de pago de la respectiva prima, para ayudar a aquellas personas que se encuentren en estado de necesidad, desvía el objetivo del contrato, pues el pago de la renta periódica es “el beneficio exclusivo de una persona determinada” y no una razón de interés social o utilidad pública, como fue el fundamento de la mentada Ley N° 21.330.

Por lo mismo, entonces, la citada Ley N° 21.330, y los actos administrativos cuestionados por esta acción, contravienen los incisos 1° y 2° del N° 24 del artículo 19 citado, por cuanto, en lo relativo al primer inciso, se ha afectado el derecho de propiedad de las compañías aseguradoras, al obligarlas a disponer de fondos propios en circunstancias que los respectivos contratos de rentas vitalicias suscritos no contemplan esa posibilidad, alterando con ello el principio de intangibilidad de los contratos.

A su vez, respecto del segundo inciso, porque en ningún caso dichas aseguradoras estaban en obligación de ver disminuido su patrimonio en las circunstancias referidas, sobre todo si no ha mediado un acto expropiatorio.

Por último, también se ha visto vulnerado el inciso 3° del citado N° 24 del artículo 19, toda vez que la Ley N° 21.000, y los actos de la CMF, alteran el ejercicio de derechos personales o créditos antes adquiridos, adueñándose el legislador de facultad de disposición que tienen las compañías aseguradoras para administrar los ingresos que han percibido legítimamente a título de primas, desprendiéndose, en lo que se denomina “retiro” de dineros que habían ingresado a su patrimonio.

**Decimotercero:** En lo que respecta al informe del Consejo de Defensa del Estado, solo cabe consignar que sus fundamentos descansan en la supremacía constitucional de la Ley N° 21.330, la que como se ha dicho más arriba tiene un origen de dudosa legalidad, unido a que no logra desvirtuar la vulneración al derecho de propiedad que se ha analizado más arriba.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWX

**Decimocuarto:** En consecuencia, con el mérito de lo que se ha venido razonando, el reclamo de ilegalidad deducido por la reclamante debe ser acogido, en todas sus partes, en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por estimarse inoficioso, dado que se ha acogido el primer motivo de ilegalidad, esta Corte omitirá pronunciarse sobre los restantes.

Por las razones anteriores y con lo dispuesto en los artículos 1° inciso 2°, 5° N° 1 y 70 de la Ley N° 21.000 y en los artículos 6, 7, 19 N° 18 y 24, 65 N° 4 y N° 6 y 127 de la Constitución Política de la República, se **acoge** el reclamo de ilegalidad deducido por Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A. en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, sin costas, y en consecuencia, se dejan **sin efecto**: a) el Oficio Circular N° 1.208, impartido a partir de la Resolución Exenta N° 2.340 de igual fecha, que ejecuta el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria N° 233 de 30 de abril de 2021; b) la Norma de Carácter General N° 453, impartida por Resolución Exenta N° 2.328 de 30 de abril de 2021, que ejecuta acuerdo adoptado por el Consejo en Sesión Ordinaria N° 233 de 29 de abril de 2021 y c) la Resolución Exenta N° 2.785 que ejecuta el acuerdo del Consejo adoptado en Sesión Ordinaria N° 237 de 27 de mayo de 2021, que rechaza íntegramente recursos de reposición en contra de los anteriores actos administrativos.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

**Contencioso-Administrativo N° 300-2021.**

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Jorge Zepeda Arancibia, señora Marisol Rojas Moya y señor Tomás Gray Gariazzo, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWX



**JORGE LUIS Zepeda ARANCIBIA**

Ministro

Corte de Apelaciones

Quince de julio de dos mil veinticuatro  
15:19 UTC-4



**Marisol Andrea Rojas Moya**

Ministro

Corte de Apelaciones

Quince de julio de dos mil veinticuatro  
13:01 UTC-4



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWX

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Marisol Andrea Rojas M. Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a quince de julio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LBFJXXSJWX

C.A. de Santiago

Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

**Visto y teniendo presente:**

**Primero:** Que el 18 de junio de 2021 comparece Gerardo Laymus Heilmaier y Francisco Javier Errázuriz Ovalle, en representación de Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A. y conforme el artículo 70 de la Ley N° 21.000 de 2017, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por diversas ilegalidades consistentes en la dictación del Oficio Ordinario N° 32.596 y la dictación de la Resolución Exenta N° 3074 de 15 de junio de 2021 que rechaza íntegramente el recurso de reposición deducido en contra del primer acto individualizado.

Previene que la Ley N° 21.330 no modificó el régimen o normativa que rige la renta vitalicia, sino que estaba dirigida a la obtención de anticipos por parte de pensionados, con tomes de 10% de la reserva técnica individual o 150 unidades de fomento.

Concluye de lo anterior que la normativa que debió dictar la reclamada para la implementación de la reforma constitucional, debió sujetarse a la normativa legal y sectorial vigente que regulaba la renta vitalicia, guardando la debida armonía con esta.

Sostiene que la Ley N° 21.330 es inconstitucional por vicios de forma y fondo, contraviniendo principios fundamentales en los que se asienta el contrato de renta vitalicia, desconociendo que el beneficiado o pensionado no es dueño de la reserva técnica, además de violar el contrato, la igualdad ante la ley, la seguridad social, la libertad de desarrollar una actividad económica, el derecho de propiedad, la esencia de los derechos, entre otras garantías.

Contextualiza que el Oficio Ordinario N° 32.596 tiene como precedente inmediato la dictación del Oficio Circular N° 1.208 y la Norma de Carácter General N° 453, que tuvieron por objeto implementar la Ley N° 21.330 que estableció mecanismo de retiro de fondos previsionales y anticipo de rentas vitalicias. En este marco, el



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXRXVJJWX

Oficio Ordinario aludido, complementó el Oficio Circular N° 1.208, al introducir como sujetos titulares del derecho de anticipo a quienes no se encuentran descritos en la reforma constitucional, por lo mismo fue objeto de reposición, siendo rechazado el 15 de junio de 2021, y que corresponde al segundo acto reclamado.

Agrega que el rechazo de la reposición lo fue sin hacerse cargo de las alegaciones y antecedentes dispuestos, limitándose a señalar como único fundamento que la competencia está delimitada a aplicar y hacer cumplir la reforma constitucional introducida por la Ley N° 21.330. Y que se genera un perjuicio a la compañía, dado que parte de la reserva técnica se constituye a partir de patrimonio de la reclamante, esto es aproximadamente en un 5%.

Expone, a continuación, una serie de conceptos relevantes a su entender, entre los cuales están los de rentas vitalicias, contrato de renta vitalicia y las consecuencias que se generan por la normativa constitucional reformada, al tener que hacer liquidaciones de activos para el pago de los 10%, todo esto en condiciones desfavorables con perjuicio patrimonial. Siendo la otra alternativa el endeudamiento.

**Argumenta como primera ilegalidad**, el exceso de la Comisión para el Mercado Financiero en el ejercicio de sus atribuciones, al ampliar la titularidad del derecho consagrado en la reforma constitucional; introducir de forma improcedente como titular del derecho de anticipo al beneficiario designado; insistir en la errada incorporación de los afiliados de renta vitalicia diferida como titulares del derecho de anticipo; introducir como titular del derecho consagrado en la Ley N° 21.330 a los beneficiarios de un pensionado fallecido que ya ejerció el derecho de la Ley N° 21.330. También por otra parte, al utilizar la renta técnica base para el pago del derecho indicado sin distinción de aquella parte de la reserva legal que corresponde a los fondos de cuenta individual y la provisión que efectúan las compañías aseguradoras para su complementación.

Explica en cuanto a la ampliación de la titularidad, que los titulares de los derechos de la reforma constitucional son los pensionados y beneficiarios, y que conforme a dicha definición estos son aquellos que ya han recibido el pago de renta vitalicia. Sin



embargo, el Oficio Ordinario 32.596 amplía este concepto para sujetos que puedan en una época posterior e indefinida recibir el pago, que corresponde al beneficiario designado por el pensionado. Agrega que el beneficiario designado ya tenía la posibilidad de retire el 100% del remanente garantizado a tasa de descuento contractualmente convenida, y ahora puede retirar el 10% sin aplicación de tasa de descuento. Dice que también se amplió el ámbito ya que pueden pedir el retiro los beneficiarios de un pensionado que ya ejerció el derecho. También cuestiona toda situación que no se ciña a lo definido por la ley, que es que los titulares del derecho al anticipo son solamente los pensionados y beneficiarios por renta vitalicia que estuvieren recibiendo pagos.

Relata sobre la utilización de la renta técnica base para el pago del derecho consagrado en la reforma constitucional que la reclamada por medio del Oficio Ordinario N° 32.596 cae en la misma ilegalidad que el Oficio Circular N° 1.208, desatendiendo el tenor de la reforma, utilizó el término “reserva técnica base”, concepto distinto y recogido en la Circular N° 1512 de la reclamada, que abarca los fondos provenientes del afiliado y los aportados por la compañía de seguro. Lo cual infringe la reforma constitucional y los artículos 1 y 5 de la Ley N° 21.000.

**Imputa como segunda ilegalidad,** la modificación y derogación improcedente de la normativa que rige el sistema de renta vitalicia, contenido en el Decreto Ley N° 3.500, esto porque el oficio reclamado, junto con el Oficio Circular N° 1.208, establecieron la reserva técnica base como aquella con cargo a la cual debe hacerse el pago del derecho de anticipo, sin distinguir las partes que componen la reserva, incluyendo la provisión de la compañía. Ahonda que el artículo 58 del Decreto Ley del ramo regula los porcentajes para el cálculo de la pensión que corresponde a beneficiarios de sobrevivencia, y que se calculan sobre la base de la pensión de referencia del causante, estableciéndose una proporcionalidad entre los herederos del pensionado, debiendo actuar estos de consuno para el ejercicio de sus derechos, conforme a los artículo 66 y 67 del D.L. N° 3.500. Pero, mediante los actos reclamados, para estos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXRXXVJWX



casos, pueden actuar individualmente, calculándose a su respecto la limitación de 150 unidades de fomento como tope, ignorándose el artículo 58 del Decreto Ley 3.500.

**Alega como tercera ilegalidad**, el desconocimiento de la reclamada de sus objetivos y funciones, además de la omisión del ejercicio de sus potestades y deberes, lo cual sería contrario a los artículos 1 y 5 de la Ley N° 21.000, artículo único de la Ley N° 21.330, en relación a los artículos 6, 7, 19 N° 2, 21, 24 y 26 de la Constitución, artículo 1545 del Código Civil y lo señalado en el artículo 2 de la Ley N° 18.575, además de normativa sectorial. Todo esto al no reconocer los vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad y no tomar medidas de mitigación de daños. Y sostiene que desatendió el mandato de la Ley N° 21.330 en cuanto no solo debía implementarla, sino también atender a los vicios que adolecía y las consecuencias patrimoniales que generaría, a la vez, que omitió regular las hipótesis para el debido reintegro, ni se hace cargo de los detrimentos que se generarían en las inversiones. Suma a sus argumentos, que al determinar la fórmula de recálculo, no incorporó aquella tasa de rentabilidad de mercado o equivalente en la hipótesis de invertir el capital que son objeto de anticipo.

**Atribuye, en cuarto lugar**, y como infracción a la Ley N° 19.880, 18.757 y las disposiciones de la Constitución Política de los artículos 6, 7, 19 N° 2 y 3, además del artículo 20 N° 3 de la Ley N° 21.000, la falta de fundamentación y motivación de los actos impugnados. Tanto por la carencia de fundamentación como por haberse dictado el Oficio Ordinario N° 32.596 por el Director General Jurídico de la reclamada, en una delegación de facultades que le correspondía al Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, por expresa disposición del artículo 20 de la Ley N° 21.000, como se indica en el numeral 2 de la disposición citada. Además, la Resolución Exenta N° 3.074 que resuelve el recurso de reposición, también adolece del mismo defecto.

**Acusa como quinta ilegalidad**, la infracción al principio de confianza legítima, en relación con los artículos 5, 6, 7, 7, 19 N° 24 y 26 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley N° 18.575, al



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXRXXVJJWX

desatender la reclamada las normas de inversión que se imponen a las compañías de seguro, además de desatender el objetivo de las mismas.

**Sostiene como sexta** ilegalidad la infracción del principio de supremacía constitucional, reserva legal y vulneración de derechos fundamentales. Precisa que la afectación de dominio o modificaciones del régimen previsional son materias de ley y no de reforma constitucional, mucho menos de una disposición transitoria vigente desde hace 40 años. Debiendo la reclamada haberse pronunciado en defecto de la ley, y no debiendo por medio de un acto administrativo regular la aplicación inmediata de una norma constitucional, sobrepasando la potestad reglamentaria.

Pide en definitiva, declarar la ilegalidad de los actos reclamados y disponer se dejen sin efecto, con costas.

**Segundo:** Que el 2 de julio de 2021 el Consejo de Defensa del Estado, representado por Ruth Israel López, evacuó informe solicitando el rechazo del reclamo.

Dice como cuestión preliminar, que el reclamo afirma que una norma constitucional es inconstitucional, lo cual sería una de las innumerables afirmaciones de esta índole que se sostienen en el reclamo.

Sostiene en primer término ausencia de ilegalidad del Oficio Ordinario N° 32.596, ya que es un acto cuyo único objeto es facilitar la implementación de la Ley N° 21.300. Reprochando en definitiva la reclamante, que la CMF no se haya inmiscuido en los tópicos regulados por la Constitución. Luego resume los hitos legislativos de la reforma constitucional y también con posterioridad el contexto de emergencia sanitaria que motivó la reforma indicada.

Fundamenta que la forma de operación del mecanismo de anticipo de rentas descarta una lesión patrimonial especialmente intensa, dado que se estableció un monto de compensación al anticipo consistente en *“se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado”*. No habiendo una exigencia de gratuidad a las compañías



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXRXXVJWX

de seguro. Por lo que solo se trata de un anticipo de las pensiones, es decir, pagar antes de lo que se debía pagar, traduciéndose el mecanismo en una menor pensión futura, pero también en una menor deuda futura respecto de los pensionados. Y reprocha que omite cualquier referencia al artículo 64 del D.L. N° 3.500 que ya preveía en anticipo de la fecha de inicio de pago de rentas vitalicias. Por otra parte, que la reserva técnica, también, va disminuyendo mes a mes en virtud de los pagos efectuados, siendo esta solo una representación de la deuda, y no una suma de dineros o activos.

Alega, por otra parte, la improcedencia de cuestionar oblicuamente una reforma constitucional por medio de esta acción constitucional. Y que los actos recurridos fueron dictados conforme a la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, que puede emitir normas de carácter general, circulares, oficios circulares y resoluciones.

Añade, además la inexistencia de norma que, debido a su errada aplicación, pueda derivar en la ilegalidad de los actos impugnados, citando normas que no se han infringido, aludiendo a preceptos que no son susceptibles de fundar una acción de ilegalidad, como lo sería por ejemplo el artículo 1545 del Código Civil. Excediendo la naturaleza de la reclamación establecida en el artículo 70 del D.L. N° 3.538.

Contesta que no hay un perjuicio acreditable conforme al tenor del reclamo, no resultando suficiente meras afirmaciones.

Explica que la invalidación que pide sería ineficaz y no se puede revertir la orden expresa que la Constitución ha dado a la reclamada. Ajustándose la actuación de la reclamada a lo dispuesto por la Constitución Política de la República.

Agrega que el Oficio Ordinario N° 32.596 no es una norma que regule nuevas materias, respetándose lo indicado en la reforma constitucional que otorgó el derecho al anticipo de pensionados de renta vitalicia. Siendo el acto reclamado jurídicamente un dictamen, esto es actos que tienen por objeto absolver consultas formuladas por interesados, precisando la interpretación que se le debe dar al



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXRXXVJJWX

ordenamiento jurídico, lo cual es amparado por los números 1 y 2 del artículo 5 del Decreto Ley N° 3.538.

Refiere en su informe, adicionalmente, a la gratuidad del retractor de los titulares del derecho de anticipo, afirmando que la norma de reforma constitucional es clara al no establecer costo para quien se desiste del adelanto, no debiendo atribuirse el sentido contrario.

Argumenta que no existe exceso en el ejercicio de atribuciones de la reclamada, en relación al Oficio Ordinario N° 32596 y la Resolución Exenta N° 3.074 que rechazó la reposición, dado que no existe una expansión ilegal del ámbito de titulares del decreto consagrado por la reforma constitucional, al amparar a aquellos que se encuentran en la situación de renta vitalicia diferida, al no hacer distinción la normativa objetada. Y separadamente también afirma que el Oficio Ordinario no dispone una ampliación de titularidad, limitándose a decir quiénes son los pensionados y beneficiarios titulares del derecho, conforme a lo dispuesto en la reforma constitucional N° 21.330, todo esto para precisar los distintos alcances de quienes se entiende que son pensionados y beneficiarios, y en atención a no existir limitación alguna en el texto constitucional.

Aduce que no existe infracción a la normativa de reservas técnicas, sin embargo, aclara que estas no son sumas de dineros o activos, sino representación de una deuda de cada contrato de seguro, por tanto no se compone de aportes de la compañía y de aportes del asegurado, sino que es una representación de la deuda para con el pensionado de renta vitalicia, no existiendo lo indicado como reserva de fondos del pensionado.

Razona que además no existe infracción al principio de confianza legítima, al haber actuado la reclamada conforme a los mandatos constitucionales dados y la normativa que la rige, no pudiendo desatender dichos cambios al ordenamiento jurídico. Además, dice que la Norma de Carácter General N° 453 es legal, en razón del endeudamiento de las compañías para el cumplimiento de lo latamente reseñado.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXRXVJJWX

Niega la falta de motivación de los actos reclamados, al tenor de su mismo mérito. Y afirma la actuación dentro del ordenamiento jurídico y la Constitución.

Aduce que el acto reclamado fue dictado por expreso mandato constitucional, la cual es suficiente en el detalle de la base de cálculo del anticipo, el monto a anticipar y la fecha de pago, no innovando el oficio circular N° 1208.

Pide en definitiva el rechazo del reclamo de ilegalidad con costas.

**Tercero:** Que el 1 de abril de 2022, el Excmo. Tribunal Constitucional remitió a estos autos fallo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad conocido bajo el ingreso N° 11633-21-INA de 31 de marzo de 2022, interpuesto por Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A. el cual desestimo el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo único, incisos 12°, 13° y 14° de la Ley N° 21.330 que modifica la Carta Fundamental, por empate de votos.

**Cuarto:** El artículo 70 de la Ley N° 21.000, en lo pertinente, establece que: *“Las personas que estimen que una norma de carácter general, instrucción, comunicación, resolución o cualquier otro acto administrativo emanado del Consejo, del presidente de la Comisión o del fiscal, según corresponda, distinto de aquellos a los que se refiere el artículo siguiente, es ilegal y les causa perjuicio, podrán presentar reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.*

*El reclamo de ilegalidad deberá interponerse dentro del plazo de diez días hábiles computado de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, contado desde la notificación o publicación del acto que rechaza total o parcialmente el recurso de reposición o desde que ha operado el silencio negativo al que se refiere el inciso tercero del artículo 69.*

*Si la Corte de Apelaciones declarar admisible el reclamo, dará traslado de éste por seis días hábiles notificando esta resolución por oficio.”*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXRXVJJWX

**Quinto:** De lo anterior se puede inferir que los actos, cuya ilegalidad se reclama por la presente vía, son: a) Oficio Ordinario N° 32.596 y b) Resolución Exenta N° 3074 de 15 de junio de 2021 que rechaza íntegramente el recurso de reposición deducido en contra del primer acto individualizado.

Conforme a la disposición legal precitada, puede inferirse que los tres actos citados en el párrafo anterior cumplen con las características que esa norma exige para ser objetos del presente reclamo de ilegalidad.

**Sexto:** Pues bien, como lo admite el propio reclamante, el Oficio Ordinario N° 32.596 tiene como precedente inmediato la dictación del Oficio Circular N° 1.208 y la Norma de Carácter General N° 453, que tuvieron por objeto implementar la Ley N° 21.330 que estableció mecanismo de retiro de fondos previsionales y anticipo de rentas vitalicias.

En este marco, el Oficio Ordinario aludido, complementó el Oficio Circular N° 1.208, al introducir como sujetos titulares del derecho de anticipo a quienes no se encuentran descritos en la reforma constitucional, por lo mismo fue objeto de reposición, siendo rechazado el 15 de junio de 2021, y que corresponde al segundo acto reclamado.

Cabe recordar que dicho Oficio Circular N° 1.208 se origina como consecuencia de lo establecido en los incisos pertinentes del artículo único introducido a la Carta Fundamental por la Ley N° 21.330, normativa dictada para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales y anticipo de rentas vitalicias, en las condiciones que indica, conocida comúnmente como “Ley del Tercer Retiro”.

Así, la referida ley agregó, como nueva disposición quincuagésima transitoria, a la Constitución Política de la República, disponiendo en los incisos 12, 13 y 14, atinentes a lo que nos ocupa, lo siguiente:

*“A partir de la publicación en el Diario Oficial de esta reforma y hasta los 365 días siguientes, los pensionados o sus beneficiarios por renta vitalicia podrán, por una sola vez y de forma voluntaria,*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXRXVJJWX

*adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al diez por ciento del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope máximo de ciento cincuenta unidades de fomento.*

*El retiro que efectúen los pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo, se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado.*

*Las reglas relativas a la intangibilidad y naturaleza de estos recursos, la tramitación de la solicitud, el pago de pensiones de alimentos impagas y la información a las autoridades correspondientes, incluida la Comisión para el Mercado Financiero, contenidas en los incisos precedentes de esta disposición, serán aplicables a las solicitudes de anticipos que efectúen los pensionados o sus beneficiarios por rentas vitalicias. Con todo, el pago de los fondos solicitados se efectuará al pensionado o sus beneficiarios en un plazo máximo de treinta días corridos, contados desde la recepción de la solicitud. La Comisión para el Mercado Financiero dictará las instrucciones necesarias para la aplicación de los incisos precedentes.”*

**Séptimo:** Al haberse rechazado el requerimiento de inaplicabilidad deducido por la reclamante ante el Excmo. Tribunal Constitucional, relativo a los incisos precitados de la disposición quincuagésima transitoria de la Carta Fundamental, como ya se indicó en el motivo tercero de esta sentencia, respecto del citado Oficio N° 32.596 y la Resolución Exenta N° 3074 de 15 de junio de 2021, siendo seis los motivos de ilegalidad que ha deducido el reclamante en esta sede, se hará un análisis conjunto, pues la mayoría de los argumentos se reiteran en los distintos capítulos.

**Octavo:** Como cuestión preliminar, cabe consignar que la ley N° 21.330, que es fuente de los actos administrativos cuestionados por esta vía fue en su oportunidad cuestionada en su origen, toda vez que mediante una reforma constitucional, se obvió la iniciativa presidencial que contempla el artículo 65 inciso 4°, N° 4 y N° 6 de la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXRXVJJWX

Carta Fundamental, esto es -en lo pertinente al N° 4- respecto de una moción parlamentaria que pretendía “... modificar pensiones, montepíos, rentas u cualquier otra clase de emolumentos (...) como asimismo fijar (...) aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos...”

Por otra parte, en lo atinente al N° 6 de la citada disposición, la norma establece que es iniciativa exclusiva del Presidente de la República: “6° Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.”

Es decir, la ley N° 21.330 es de dudosa legalidad y constitucionalidad, toda vez que, al versar su contenido en una forma distinta de pagar las rentas vitalicias, tratándose, además, de temas de seguridad social, correspondía solo al Presidente de la República su iniciativa legal, lo que no ocurrió de esa forma.

**Noveno:** Ahora bien, si dicha normativa nace al mundo jurídico de manera ilegal, pues contraría los preceptos constitucionales que el texto Fundamental establece para la formación de una ley, mal puede ostentar la categoría de una “reforma constitucional”, y debe ser tratada como una norma de rango legal.

Así se desprende, por lo demás, de lo que señala el artículo 127 inciso 3° de la Carta Fundamental, en cuanto establece “...*serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley.*”

En efecto, los ministros del Excmo. Tribunal Constitucional que estuvieron por acoger el requerimiento de inaplicabilidad deducido por la reclamante, en los considerandos **10°)** a **15°)** de la sentencia recaída en Rol N° 11.633-2021, sostienen, en síntesis, que el primer inconveniente para analizar la constitucionalidad de los incisos 12, 13 y 14 del artículo único de la Ley N° 21.330 es precisamente su origen viciado, por las razones dadas anteriormente.

**Décimo:** Consecuencia de lo anterior, que no es menor, surge como segundo cuestionamiento si la Comisión para el Mercado Financiero, al dictar los actos administrativos que han sido





impugnados como ilegales, actuó dentro de la órbita de sus atribuciones.

Pues bien, el artículo 5° N° 1 de la Ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, establece lo siguiente: *“La Comisión está investida de las siguientes atribuciones generales, las que deberán ser ejercidas conforme a las reglas y al quórum de aprobación que determine esta ley:*

*1. Dictar las normas para la aplicación y cumplimiento de las leyes y reglamentos y, en general, dictar cualquier otra normativa que de conformidad con la ley le corresponda para la regulación del mercado financiero. De igual modo, corresponderá a la Comisión interpretar administrativamente las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas, entidades o actividades fiscalizadas, y podrá fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para su aplicación y cumplimiento. Estas potestades no podrán extenderse en ningún caso a las facultades normativas e interpretativas que le corresponden al Banco Central de Chile de conformidad con la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 de su ley orgánica constitucional.”*

**Undécimo:** Respecto de la norma recién reproducida es claro que la CMF si bien cuenta con atribuciones para dictar instrucciones, fijar normas e impartir instrucciones, esto no puede hacerlo vulnerando legítimos derechos adquiridos por los destinatarios de esas órdenes, en particular las compañías aseguradoras.

En efecto, como se analizará más adelante, la función esencial de la CMF es la regulación del mercado financiero; por ende, no puede alterar, de mutuo propio la intangibilidad de los contratos de renta vitalicia vigentes, aún so pretexto de estar dando cumplimiento a una norma de rango constitucional.

En efecto, si la citada preceptiva tiene claros vicios en su origen, como ya se explicó en los motivos anteriores y, además, atenta contra derechos fundamentales, mal puede escudarse la CMF en que estaba obligada a dar cumplimiento a ese mandato, pues su primera obligación, conforme el artículo 1° inciso 2° de la ley N° 21.000, es “velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXRXVJJWX

estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Para ello deberá mantener una visión general y sistémica del mercado, considerando los intereses de los inversionistas, depositantes y asegurados, así como el resguardo del interés público.”

En esa perspectiva, entonces, considerando que la disposición única de la Ley N° 21.330 altera ostensiblemente los efectos del contrato de renta vitalicia, y los desnaturaliza, obligando a las compañías de seguros a pagar a los pensionados sumas que no están previstas en el contrato, sin derecho a retorno o devolución e incorporando un falso concepto de la reserva técnica, lisa y llanamente la CMF se está alejando de sus funciones y no está regulando el mercado financiero como en rigor le corresponde.

En consecuencia, al obrar de ese modo e impartir instrucciones y normas que se alejan de la función a la cual está llamado ese órgano, la CMF no actuó conforme a derecho ni dentro de su competencia y atribuciones, pues lo que le correspondía era representar las ilegalidades contenidas en la citada Ley N° 21.330, relativas a las irregularidades que significaba para las compañías de seguros dar cobertura a lo que se había establecido en esa ley.

**Duodécimo:** Como tercer elemento de juicio, corresponde analizar la vulneración de los actos administrativos cuestionados, así como la Ley N° 21.330 al derecho de propiedad, contemplado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Es relevante para ese análisis señalar que el artículo 2.264 del Código Civil define la constitución de renta vitalicia como “un contrato aleatorio en que una persona se obliga, a título oneroso, a pagar a otra una renta o pensión periódica, durante la vida natural de cualquiera de estas dos personas o un tercero.”

Por su lado, el artículo 62 del D.L. N° 3.500 de 1980, señala que “Renta Vitalicia Inmediata es aquella modalidad de pensión que contrata el afiliado con una Compañía de Seguros de Vida, en la que esta se obliga al pago de una renta mensual, desde el momento que suscribe el contrato y hasta su fallecimiento y a pagar pensiones de sobrevivencia a sus beneficiarios...”



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXRXXVJJWX

Por ende, el contrato de renta vitalicia es un contrato típico o nominado, con una identidad y fisonomía propias, que lo distingue de otras fórmulas convencionales. Como puede advertirse, los contratantes saben de antemano qué efectos produce el contrato de renta vitalicia, sin necesidad de cambios legislativos, pues se rigen por las leyes vigentes al momento de su otorgamiento.

En este contexto, entonces, es claro que la Ley N° 21.330 alteró las características del contrato de seguro antes referido, pues desconoció que las primas pagadas ya habían ingresado legítima y definitivamente al patrimonio de las compañías aseguradoras, con las cuales éstas hicieron sus cálculos e inversiones, justamente para poder cumplir con sus compromisos a futuro.

Aún más, al disponer la Ley N° 21.330 una transferencia de recursos que ingresó al patrimonio de las aseguradoras a título de pago de la respectiva prima, para ayudar a aquellas personas que se encuentren en estado de necesidad, desvía el objetivo del contrato, pues el pago de la renta periódica es “el beneficio exclusivo de una persona determinada” y no una razón de interés social o utilidad pública, como fue el fundamento de la mentada Ley N° 21.330.

Por lo mismo, entonces, la citada Ley N° 21.330, y los actos administrativos cuestionados por esta acción, contravienen los incisos 1° y 2° del N° 24 del artículo 19 citado, por cuanto, en lo relativo al primer inciso, se ha afectado el derecho de propiedad de las compañías aseguradoras, al obligarlas a disponer de fondos propios en circunstancias que los respectivos contratos de rentas vitalicias suscritos no contemplan esa posibilidad, alterando con ello el principio de intangibilidad de los contratos.

A su vez, respecto del segundo inciso, porque en ningún caso dichas aseguradoras estaban en obligación de ver disminuido su patrimonio en las circunstancias referidas, sobre todo si no ha mediado un acto expropiatorio.

Por último, también se ha visto vulnerado el inciso 3° del citado N° 24 del artículo 19, toda vez que la Ley N° 21.000, y los actos de la CMF, alteran el ejercicio de derechos personales o créditos antes adquiridos, adueñándose el legislador de facultad de disposición que



tienen las compañías aseguradoras para administrar los ingresos que han percibido legítimamente a título de primas, desprendiéndose, en lo que se denomina “retiro” de dineros que habían ingresado a su patrimonio.

**Decimotercero:** En lo que respecta al informe del Consejo de Defensa del Estado, solo cabe consignar que sus fundamentos descansan en la supremacía constitucional de la Ley N° 21.330, la que como se ha dicho más arriba tiene un origen de dudosa legalidad, unido a que no logra desvirtuar la vulneración al derecho de propiedad que se ha analizado más arriba.

**Decimocuarto:** En consecuencia, con el mérito de lo que se ha venido razonando, el reclamo de ilegalidad deducido por la reclamante debe ser acogido, en todas sus partes, en la forma que se indicará en lo resolutive.

Por las razones anteriores y con lo dispuesto en los artículos 1° inciso 2°, 5° N° 1 y 70 de la Ley N° 21.000 y en los artículos 6, 7, 19 N° 18 y 24, 65 N° 4 y N° 6 y 127 de la Constitución Política de la República, se **acoge** el reclamo de ilegalidad deducido por Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A. en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, sin costas, y en consecuencia, se dejan **sin efecto** el Oficio Ordinario N° 32.596 y la Resolución Exenta N° 3074 de 15 de junio de 2021, que rechaza íntegramente el recurso de reposición deducido en contra del primer acto singularizado.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

**Contencioso-Administrativo N° 338-2021.**

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Jorge Zepeda Arancibia, señora Marisol Rojas Moya y señor Tomás Gray Gariazzo, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXRXVJWX



**JORGE LUIS Zepeda ARANCIBIA**

Ministro

Corte de Apelaciones

Quince de julio de dos mil veinticuatro  
15:19 UTC-4



**Marisol Andrea Rojas Moya**

Ministro

Corte de Apelaciones

Quince de julio de dos mil veinticuatro  
13:01 UTC-4



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXRXXVJJWX

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Marisol Andrea Rojas M. Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a quince de julio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXRXVJJWX

C.A. de Santiago

Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Con fecha 27 de mayo de 2021 comparece Arturo Fermandois Vöhringer, abogado, en representación de **Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. e Inversiones Banpenta II Limitada**, e interpone recurso de protección en contra de (i) la **Comisión para el Mercado Financiero** (en adelante CMF), representada por su presidente, Joaquín Cortez Huerta, (ii) contra Daniel García Schilling en su calidad de Director General de Conducta del Mercado de la Comisión para el Mercado Financiero y (iii) en contra de José Antonio Gaspar Candia en su calidad de Director General Jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero, por motivo de la dictación de los actos ilegales y arbitrarios consistentes en Oficio Circular N° 1.208 de 28 de abril de 2021 (denominado “oficio circular”); Acuerdo del Consejo de la CMF alcanzado en sesión extraordinaria 102 de 30 de abril de 2021, ejecutado por la Resolución Exenta N° 2.340 de misma fecha y origen del Oficio Circular; Oficio Electrónico OFORD N° 311206, SGD N° 202105018465 emitido por Daniel García Schilling por orden del Consejo de la CMF el 11 de mayo de 2021 (denominado “oficio rentas vitalicias diferidas”); y el Oficio electrónico OFORD N° 32596, SGD N° 2021050190789 emitido por José Antonio Gaspar Candia por orden del Consejo de 14 de mayo de 2021 (denominado “oficio aclaratorio”), que conculcarían las garantías de los numerales 2, 4, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Previene que además de las garantías referidas, los actos recurridos amenazan la estabilidad financiera de las compañías de seguro involucradas, la cual es indispensable para cumplir las obligaciones de pago contraídas con los pensionados y asegurados por las misma, y con quienes mantienen contrato, pudiendo afectarse el interés patrimonial de ellos, también, se afecta el interés



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXXEXXKJJWX

patrimonial de los accionistas de una de las compañías de seguro afectadas.

En segundo lugar, anticipa que los actos recurridos fueron dictados arbitrariamente sin fundamentación conforme a la Ley N° 19.880 y sin convocar a la consulta pública previa que ordena el artículo 20 N° 3 de la Ley N° 21.000, con lo que discriminó a los destinatarios del oficio, y esto sin estar en la hipótesis de excepción de consulta pública al haber omitido el único requisito consistente en la dictación de una resolución fundada.

**Aborda, en primer término las ilegalidades del Oficio Circular N° 1.208 de la CMF,** (i) por vulnerar la Reforma Constitucional introducida por la Ley N° 21.330, al exorbitar el acto recurrido y contradecir el texto de la reforma constitucional, esto al definir erróneamente la reserva técnica que soportará los adelantos de las rentas vitalicias, disponiendo de dineros de las compañías recurrentes que jamás pertenecieron a los pensionados. En tanto el concepto constitucional sobre el cual se aplicará el adelanto es *“la reserva técnica que mantenga el pensionado”* según lo dispone la disposición transitoria quincuagésima inciso 12°, sin embargo el oficio ordena algo distinto, que es *“la reserva técnica a considerar, en consistencia con la Circular 2.062, será la reserva técnica base”*.

Ahonda refiriendo que los incisos 12° y 13° de la Disposición Transitoria Quincuagésima de la Constitución disponen:

*“A partir de la publicación en el Diario Oficial de esta reforma y hasta los 365 días siguientes, los pensionados o sus beneficiarios por renta vitalicia podrán, por una sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al diez por ciento del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope máximo de ciento cincuenta unidades de fomento.*

*El retiro que efectúen los pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo, se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado”*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXEXXKJJWX



Y que la frase final del inciso 14° de la misma disposición dice: *“La Comisión para el Mercado Financiero dictará las instrucciones necesarias para la aplicación de los incisos precedentes”*.

Alega, entonces, que la recurrida debe proceder respecto de las rentas vitalicias, instruyendo únicamente para la aplicación de los incisos precedentes, y no aplicando otros textos, como lo hace la Circular reclamada, o ampliar el sentido del texto citado.

Precisa, por otra parte, que el verbo mantener no es casualidad, porque alude inequívocamente a algo sobre lo que se dispone, un título, entonces la reserva técnica objeto de la normativa se trata de algo que es del pensionado, respecto de lo cual se mantiene una determinada relación jurídica. Afirma, que no habría duda que las recurrentes son propietarias, en dominio, de los fondos transferidos por los pensionados en el contrato de renta vitalicia -denominada prima-, y como contraprestación las compañías asumen el riesgo de pagar la renta vitalicia acordada.

Aclara, bajo este marco, que la reserva técnica que mantiene el pensionado es aquella constituida por el total de los fondos acumulados en la AFP que antes de celebrar el contrato fueron de propiedad del pensionado. Sobre esto profundiza que la reserva técnica se forma para cada cuenta con dos tipos de fondo, el capital del afiliado, proveniente de sus fondos de AFP y el aporte de la Compañía, que provienen de fondos propios de la compañía, en suma, lo que se refiere por las normas citadas, es que el retiro solo puede aplicarse en aquella clase de reserva técnica que se integra con el capital del afiliado, no pudiendo retirarse aquella parte que no aportó el afiliado.

Argumenta, que sin perjuicio de lo anterior, el Oficio Circular, alude a la reserva técnica base, la cual es aludida en la Circular N° 1.512 de 2 de enero de 2001, al siguiente tenor: *“Reserva técnica calculada de acuerdo a las normas actuariales dictadas por esta Superintendencia, determinada según el procedimiento descrito en el Título III de la presente circular”*. Luego el título III de la circular precisa la forma de la reserva técnica base, diciendo: *“Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, la reserva técnica base*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXXEXXKJJWX

*correspondiente a aceptaciones que provengan de cesiones originalmente efectuadas por la misma compañía deberá ser determinada con los mismos parámetros utilizados para calcular la reserva técnica base al momento de entrada en vigencia de la póliza de seguro directo subyacente, esto es, la TCj o la TVj, según corresponda”*

Explica, que el anticipo forzado de fondos propios, en contra de los contratos de renta vitalicia, priva a las compañías del uso de dineros sometidos a la obligación legal de rentabilizarse, debiendo asumir las recurrentes el costo patrimonial y de prestigio por la falla administrativa.

(ii) Agrega, en cuanto al mismo acto recurrido, que este transgrede el artículo 20 N° 3 de la Ley N° 21.000 al no contener motivación y vulnera el inciso segundo del artículo 1 y el número 1 del artículo 5 de la Ley N° 21.000, al no haber realizado la consulta pública para la dictación del oficio circular.

(iii) Fundamenta, en tercer término sobre este acto, que el oficio circular extiende el derecho de adelanto a las rentas vitalicias diferidas, y no solamente a las puras y simples indicadas por la reforma, de este modo, abarcando a quienes no son pensionados, multiplicando así el límite constitucional de 150 unidades de fomento.

Aclara que dicha ilegalidad o arbitrariedad se establece en el párrafo segundo del numeral 2 del oficio reseñado en tanto expone *“Por lo tanto, quien puede solicitar un anticipo es el pensionado (sea de renta vitalicia inmediata o diferida) o sus beneficiarios que tienen derecho a una renta vitalicia, considerando para tal efecto, la reserva técnica calculada para ese pensionado o beneficiario. Se precisa para estos efectos que por beneficiarios se entenderán aquellos que ya han accedido al pago de la renta vitalicia”*, lo cual sería contrario a lo dispuesto en la reforma constitucional que solo alude a rentas vitalicias, esto es las puras y simples. Ejemplifica que esta contradicción podría generar que una persona podría obtener la suma de 150 unidades de fomento de su AFP y luego de la compañía de seguros.



(iv) Expone, la vulneración del artículo 2 inciso segundo de la Ley N° 18.575, que ordena a los órganos del Estado respetar el derecho para realizar cualquier actividad económica.

(v) Refiere, en quinto lugar, que la recurrida vulneró su propia ley orgánica, que le encomienda aplicar e interpretar la ley velando por el correcto funcionamiento del mercado financiero, lo cual se habría desatendido en el presente caso.

**Aborda, en segundo término, las ilegalidades y arbitrariedades del Oficio de Rentas Vitalicias Diferidas y del Oficio Aclaratorio.**

(i) Previene que el oficio aclaratorio, también mandata que el anticipo debe calcularse sobre la reserva técnica base, no sobre la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones. Por otra parte, que también extiende el anticipo a rentas vitalicias diferida. A la vez, el Oficio Aclaratorio, señala que en caso de existir varios beneficiarios de sobrevivencia, cada uno de ellos podría ejercer el derecho de anticipo, con un límite individual de 150 unidades de fomento, excediendo totalmente la reforma constitucional, que establece los límites de un monto equivalente al 10% o un tope de 150 unidades de fomento.

(ii) Acusa que se cometió una ilegalidad adicional, que se vincula con la falta de competencia legal de quien dictó el Oficio Aclaratorio y el Oficio de Rentas Vitalicias Diferidas, en tanto no fueron emitidos por la CMF, sino por José Antonio Gaspar Candia, Director General Jurídico por orden del Consejo de la CMF, transgrediendo la Quincuagésima disposición transitoria, y la prohibición de delegación de facultades contenida en el artículo 20 inciso segundo de la Ley N° 21.000 y artículo 9 N° 2 del mismo texto legal.

Dice que lo anterior también es aplicable al Oficio de Rentas Vitalicias diferidas, dictado por Daniel García Schilling, Director General de Supervisión de Conducta de Mercado, que se emitió por una solicitud de información, pero que da una orden de pagar anticipos, bajo amenaza de futuras sanciones.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXXEXXKJJWX

Fundamenta que los actos individualizados conculcan el derecho de propiedad de las recurrentes, al afectarse el uso, goce y disposición de las cantidades de dinero objeto de anticipo, estimándose al momento del recurso un perjuicio entre 2.700.000 unidades de fomento, más 450.000 unidades de fomento por lucro cesante; alude la vulneración de la igualdad ante la ley, en tanto presupone la garantía la aplicación a circunstancias y hechos abarcados por las mismas y no otras, como ha ocurrido con los actos reclamados, a la vez, por igualar a los titulares de renta vitalicia diferida con aquellos que gozan de una renta actual; también, la afectación de igual repartición de las cargas públicas que deben soportar los recurridos en relación con el derecho del numeral 20 del artículo 19 de la Constitución Política; discute la afectación de la libre iniciativa económica consagrada en el artículo 19 número 21 de la Constitución por los hechos ya expuestos; y la vulneración del derecho a la honra por el riesgo al prestigio comercial por causas no imputables a los recurrentes, sino al administrador.

Pide se ordene reestablecer el imperio del derecho y la vigencia de los derechos constitucionales, adoptando con la mayor premura todas las medidas que juzgue razonables para reparar el imperio del derecho quebrantado, entre las cuales se pide dejar sin efecto todos los actos administrativos ya individualizados, o, en subsidio, lo que estime esta Corte.

**Segundo:** Que el 11 de agosto de 2021 evacuó informe Carolina Vásquez Rojas, abogada procuradora Fiscal de Santiago (S) del Consejo de Defensa del Estado, en representación de los recurridos.

**Alega en primer término, como cuestión previa,** que los actos administrativos dictados por la CMF, Circular N° 1208, Oficio Ordinario N° 31206 y Oficio Ordinario N° 32596, en caso de querer ser impugnados, lo deben ser por la vía creada al efecto, y que se encuentra contenida en el artículo 70 del Decreto Ley N° 3.538, que dice *“Las personas que estimen que una norma de carácter general, instrucción, comunicación, resolución o cualquier otro acto administrativo emanado del Consejo, del presidente de la Comisión o*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXXEXXKJJWX

*del fiscal, según corresponda, distinto de aquellos a los que se refiere el artículo siguiente, es ilegal y les causa perjuicio, podrán presentar reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.” O, conforme lo dispone el artículo 68 del mismo cuerpo normativo: “Las personas o entidades que estimen que los actos administrativos que emita la Comisión no se ajustan a la ley, reglamentos o normas que le compete aplicar podrán impugnarlos mediante los recursos que señala este título, sin perjuicio de los que sean procedentes de conformidad a las normas generales.” Contextualiza que ya estaría en conocimiento de esta Corte un reclamo de ilegalidad en contra del Oficio Circular N° 1208, bajo el ingreso N° 262-2021.*

**Invoca, también antes de entrar al fondo, la falta de legitimación activa de Banpenta II Limitada**, en tanto terceras personas jurídicas no pueden invocar un interés propio en los efectos del acto, solo por ser accionista o tener propiedad en la persona jurídica supuestamente afectada.

**Indica, ya sobre el fondo del recurso**, que la invalidación pedida sería ineficaz, dado que la disposición quincuagésima transitoria de la Constitución seguirá vigente, y los pensionados tendrán derecho a exigir un anticipo y las compañías estarán obligadas a pagarlo, como se ha efectuado a esta fecha.

Explica la inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad en tanto los actos reclamados son instrucciones de carácter operativo y cuyo objeto es facilitar la implementación de la reforma constitucional. Entonces dirigen la acción supuestamente en contra de un acto que incumple el mandato, pero en realidad se trata de actos que se sustentan en la reforma constitucional, y esto para obtener un adelanto o anticipo de la renta vitalicia, por motivo de la crisis social y sanitaria provocada por la pandemia, resumiendo luego la historia de la reforma constitucional.

Agrega que la reforma estableció una forma de compensación al retiro, consistente en que el adelante *“se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXXEXXKJJWX

*efectivamente retirado*” por tanto, no habría una entrega gratuita por parte de las compañías al momento de hacer el pago del anticipo.

Alega, por otra parte, la improcedencia de cuestionar oblicuamente una reforma constitucional por medio de esta acción constitucional. Y que los actos recurridos fueron dictados conforme a la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, que puede emitir normas de carácter general, circulares, oficios circulares y resoluciones.

Aduce que no existe infracción a la normativa de reservas técnicas, sin embargo, aclara que estas no son sumas de dineros o activos, sino representación de una deuda de cada contrato de seguro, por tanto no se compone de aportes de la compañía y de aportes del asegurado, sino que es una representación de la deuda para con el pensionado de renta vitalicia, no existiendo lo indicado como reserva de fondos del pensionado.

Razona, por otra parte, que para la emisión de dictámenes la recurrida no debe sujetarse a un proceso normativo, como se desprende y distingue en los números 1 y 2 del artículo 5 del Decreto Ley N° 3538, esto en relación con el Oficio Ordinario N° 32.596 y 31.206. También que el primer oficio recién indicado, no dispone una ampliación de la titularidad del derecho consagrado en la normativa constitucional.

Alega que se encuentran motivados y fundados los dos oficios citados en el párrafo anterior, además que conforme al artículo 20 del D.L. N° 3.538, el Consejo puede delegar determinadas facultades de administración, autorización, inscripción y funcionamiento en el presidente, otros comisionados u otras autoridades conforme a su normativa interna. Por lo mismo, los actos recurridos que se cuestiona no haber sido dictados por el Consejo, lo fueron por su orden.

Contextualiza que no se explica la forma concreta de la afectación al dominio invocado, no siendo intangibles los contratos de renta vitalicia, en tanto ya estaba contemplada dicha posibilidad en el D.L. N° 3.500 desde 1980 en el artículo 64 inciso segundo, que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXXEXXKJJWX

permite que en cualquier momento las partes podrán anticipar la fecha a partir del cual la compañía iniciará el pago de la renta diferida.

Refiere, por otra parte, la no conculcación de la igualdad ante la ley, en tanto se encontrarían en la misma situación idénticas personas naturales o jurídicas, no habiendo un trato diferenciado por parte de la recurrida. Tampoco vulneración de la garantía del numeral 21 del artículo 19 de la Constitución en el desarrollo de cualquier actividad económica lícita, ni el derecho a la protección de la vida privada y honra. Siendo la actuación de las recurridas conforme a la Constitución Política, debido a la misma reforma constitucional.

Pide en definitiva el rechazo del recurso de protección con costas.

**Tercero:** Que el 18 de marzo de 2022, el Excmo. Tribunal Constitucional remitió a estos autos fallo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad conocido bajo el ingreso N° 11683-21-INA de 17 de marzo de 2022, interpuesto por Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. el cual acogió por mayoría la inaplicabilidad planteada, declarando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo único, incisos 12°, 13° y 14° de la Ley N° 21.330 que modifica la Carta Fundamental.

**Cuarto:** El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXXEXXKJJWX

**Quinto:** Conjuntamente con el presente recurso de protección los recurrentes Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. e Inversiones Banpenta II Limitada dedujeron un reclamo de ilegalidad contra la Comisión por el Mercado Financiero, conforme al artículo 70 de la Ley N° 21.000, que se encuentra ingresado en esta Corte con el N° 262-2021 de lo Contencioso- Administrativo y en que se pide, del mismo modo que en esta acción de protección, se declare ilegal el Oficio Circular N° 1.208 de 28 de abril de 2021 como la Resolución Exenta N° 2.340 de misma fecha.

Por ende, al encontrarse dichos actos administrativos impugnados mediante un reclamo de ilegalidad, recurso idóneo para estos efectos, cuya tramitación ha sido coetánea a la presente acción cautelar, solicitándose como petición concreta lo mismo que en esta vía, se omitirá pronunciamiento al respecto por esta vía, por resultar inoficioso, ya que la eventual ilegalidad de esos actos administrativos se encuentra sometida bajo el imperio del derecho y será resuelta en el reclamo respectivo.

**Sexto:** En lo que respecto al resto de los documentos que han sido impugnados en el presente recurso, esto es Oficio Electrónico OFORD N° 311206, SGD N° 202105018465 emitido por Daniel García Schilling por orden del Consejo de la CMF el 11 de mayo de 2021 (denominado “oficio rentas vitalicias diferidas”); y el Oficio electrónico OFORD N° 32596, SGD N° 2021050190789 emitido por José Antonio Gaspar Candia por orden del Consejo de 14 de mayo de 2021 (denominado “oficio aclaratorio”), estima esta Corte que tampoco procede emitir pronunciamiento a su respecto, pues su suerte dependerá de lo que se decida en el mentado reclamo de ilegalidad sobre el Oficio Circular N° 1.208 de 28 de abril de 2021 como la Resolución Exenta N° 2.340 de misma fecha, ya que son consecuencia de aquellos.

**Séptimo:** En consecuencia, siendo los mentados actos administrativos objeto de un reclamo contencioso-administrativo pendiente, razón por lo cual –como se dijo- la eventual ilegalidad de esos actos se encuentra ya sometida al imperio del derecho, la presente acción cautelar debe ser rechazada.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXXEXXKJJWX



Por los motivos precedentes, más lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema sobre la materia, se **rechaza** el recurso de protección deducido por Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. e Inversiones Banpenta II Limitada en contra de la Comisión para el Mercado Financiero y demás recurridos.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

**Protección N° 25.119-2021.**

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Jorge Zepeda Arancibia, señora Marisol Rojas Moya y señor Tomás Gray Gariazzo, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



**JORGE LUIS Zepeda ARANCIBIA**

Ministro

Corte de Apelaciones

Quince de julio de dos mil veinticuatro  
15:19 UTC-4



**Marisol Andrea Rojas Moya**

Ministro

Corte de Apelaciones

Quince de julio de dos mil veinticuatro  
13:01 UTC-4



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXXEXXKJJWX

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Marisol Andrea Rojas M. Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a quince de julio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXXEXXKJJWX